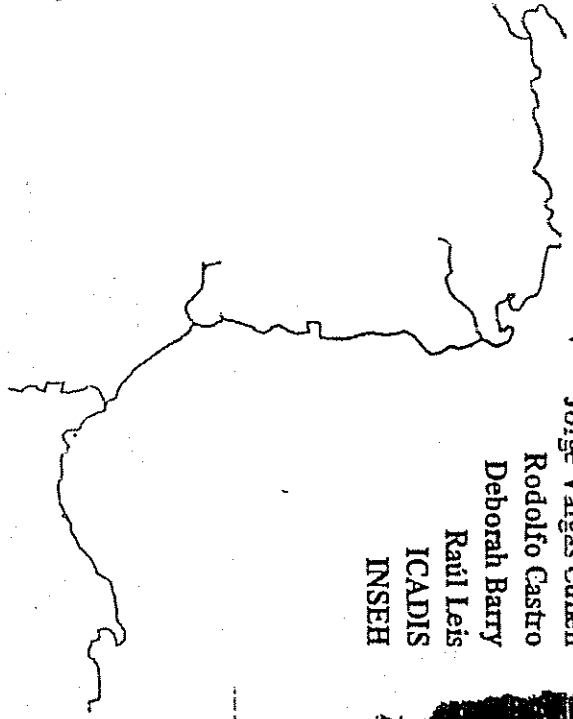


BARRY DE ROSA =
EN: Editorial DEL, Cosmopolita. 1985 -

Raúl Vergara Meneses
Jorge Vargas Cullbell
Rodolfo Castro
Deborah Barry
Raúl Leis
ICADIS
INSEH



BARRY DE ROSA =

CENTROAMERICA LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD



LA GUERRA TOTAL
LA NUEVA IDEOLOGIA CONTRAINSURGENTE
NORTEAMERICANA *

DEBORAH BARRY
RAUL VERGARA
RODOLFO CASTRO

INTRODUCCION

En un mismo periodo en Centroamérica se producen varios hechos que van a dar lugar a un giro de 180 grados en la situación política de la región. Estos hechos son: el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua un golpe de Estado en El Salvador que pone fin al gobierno militar del General Carlos Humberto Romero y en Guatemala se registra un auge en la organización y lucha revolucionaria que amenaza el *status quo*. Con estos hechos, a lo largo del Istmo se abre una nueva etapa histórica. El reto popular organizado demuestra la ineficacia de las viejas dictaduras militares centroamericanas como modelo de dominación imperialista.

Una transición política hacia formas más democráticas de gobierno se hace patente, pero a diferencia del proceso democratizador en América del Sur, en Centroamérica ya existe el ejemplo de una revolución exitosa. El dilema que esto constituye para la política exterior estadounidense será mostrado en los años siguientes, cuando Centroamérica —y sobre todo Nicaragua— se convierta en eje central de la atención pública estadounidense durante más de media década.

Cómo mantener el control hegemónico de los procesos de cambio en el "traspasito" de Norteamérica se convertirá en la prueba de "resolución" de su dominio en los países del Tercer Mundo.

En medio de un giro estratégico de su política exterior global ("unilateralismo", propuesta de "primer golpe", Iniciativa de Defensa Estratégica, etc.), Centroamérica provoca el reinicio de los debates aún no resueltos, de la década anterior.

Dentro de este marco, Centroamérica se convierte en uno de los retos ejemplificadores del fondo del debate. La coincidencia de estos

* Este trabajo fue presentado en la conferencia "U.S.—Central American Relations: a five years assessment", en la Universidad de California del Sur, por el equipo "Conflictos y Alitel", tras de Paz en la Región Centroamericana" de CRIES, Febrero de 1986.

la capacidad que tiene la nación para proteger el suministro vital de petróleo y la base de energía de la economía global.

Lo que originalmente fue la preocupación central de los sectores empresariales y políticos: el acceso controlado a los campos petroleros de ultramar, daría paso más tarde a una inquietud más general: la seguridad global de los Estados Unidos. Poco antes de asumir la presidencia Ronald Reagan, se abrió un período de redefinición, no sólo de la política de seguridad nacional en sí, sino de las mismas premisas sobre las que sería elaborada.

Tal redefinición se basó fundamentalmente en la aceptación del hecho de que los Estados Unidos había perdido poder como líder político-económico indiscutible en el mundo occidental. A la luz de este reconocimiento se exige una reevaluación, sobre todo de la relación con su adversario principal: la Unión Soviética; y una apreciación de la "capacidad" de enfrentamiento de Estados Unidos en todos los planos y teatros... lo nuclear, lo convencional (Europa Central) y lo no convencional (según esta Administración, los "movimientos de liberación nacional" en el Tercer Mundo).

Si bien se inicia una aceptación generalizada de la existencia de una cierta "paridad nuclear" entre las dos potencias, también se prevé una probabilidad decreciente de guerra convencional en Europa. La apreciación sobre el futuro de los "pequeños conflictos" en el Tercer Mundo es, sin embargo, opuesta. Efectivamente, un buen sector del pensamiento estratégico norteamericano estima que los Estados Unidos se verá involucrado en este tipo de guerras a lo largo del siglo actual y más allá.²

Además del quiebre que sufrieron los intereses norteamericanos en el Medio Oriente, con un significado económico obvio (primera crisis petrolera para el consumidor EE.UU.) en este mismo período, precisamente entre 1974 y 1981, se registraron cambios sociales y políticos considerables en 14 países del mundo. En cada uno de ellos el gobierno de los EE.UU. resintió la llegada al poder de gobiernos no alineados con su política.³

1) *Revista Business Week*, marzo de 1979, artículo sobre la declinación del poder estadounidense, págs. 30-35 (traducción del autor).

Nota: Por traducción del autor nos referimos a los autores de este trabajo.

2) Este tema se trata en el primer número de informes, documentos y estudios, entre otros mencionamos:

a) Robert Kupperman Associates, *Low-Intensity Conflict*, un estudio preparado para el U.S. Army Training and Doctrine Command (1983).

b) Richard H. Shultz et al., "Low Intensity Conflict" en *Mandate for Leadership II: Continuing the Conservative Revolution*, The Heritage Foundation (Washington D.C., 1984).

c) Robert Kupperman y William J. Taylor, Jr., editores, *Strategic Requirements to the Year 2000*, del Center for Strategic Studies (Massachusetts, 1983), capítulos 10 y 11.

3) Los autores as son: Mozambique, Zimbabue, Angola, Granada, Nicaragua, Irán, Afganistán, Vietnam, Camboya, Guinea-Bissau, Sao Tome y Cabo Verde y Etiopía.

dos procesos produciría, a lo largo de los próximos seis años, una ligazón sumamente estrecha entre ambos, afectándose uno al otro de una manera cada vez más directa. Así, los países de Centroamérica —sin proponérselo— fueron escogidos como los "conflictos por excelencia", en donde los Estados Unidos debería resolver el problema pos-Vietnam de la aplicación de sus fuerzas de ultramar, elemento clave dentro del marco estratégico de la emergente "Doctrina Reagan".

En este trabajo se intentará examinar una parte de este proceso. Primero, desde la perspectiva del poder imperial en su intento de sobre-determinar el curso de los cambios inevitables en los países del Istmo. Segundo, es en el terreno del desarrollo de las mismas guerras contra-insurgentes y contrarrevolucionarias, donde se vislumbra que el aparato de seguridad norteamericana empieza a forjar una nueva doctrina para tales fines, que luego podrá ser aplicable a cualquier "conflicto similar".

Partiendo de allí el trabajo se desarrolla en un segundo plano, al nivel de la implementación de la nueva doctrina, concentrándose en el proceso de "internalización" del proyecto de la seguridad nacional por parte de los países receptores. Basados principalmente en los ejemplos de Nicaragua y El Salvador, se presentan algunos indicadores que nos muestran una creciente militarización del Estado y la sociedad civil local.

I. LA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO

A) LA DOCTRINA REAGAN

Una revisión de la situación interna en los Estados Unidos al final de la década de los setenta recuerda los niveles de preocupación nacional manifestados en varios medios de la época. El famoso número de la revista *Business Week* (Marzo de 1979), dedicado al tema del *Decline of U.S. Power*, puso de relieve lo que algunos analistas llaman el debate más intenso en que se han envuelto las estructuras norteamericanas de poder desde la guerra de Vietnam.

En un "vistazo público poco común" al debate, la revista comentó:

Desde la guerra de Vietnam los Estados Unidos ha sufrido los efectos de una desordenada/desbordada serie de choques que marcan una erosión acelerada de su poder e influencia.

Ahora hay evidencias de la debilidad estadounidense por todos lados y ya se están viendo resquebrajamientos en el sistema. Las políticas que se siguieron durante la guerra de Vietnam constituyen ahora una amenaza para el sistema de vida (nuestro) que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. La retirada militar que empezó con la derrota de los Estados Unidos, en un lugar en el que contaba con recursos no renovables, amenaza ahora con socavar

Lo que surge en este periodo es el reconocimiento de parte del pensamiento estratégico estadounidense de que la existencia de este tipo de conflictos en el Tercer Mundo iba a ser un fenómeno más o menos permanente. En medio del proceso de reevaluación de la política estadounidense, estos hechos van a impactar e influenciar sobre la reestructuración de los instrumentos políticos y militares que se utilizarían para enfrentarlos. Esto se refleja en los principales estudios que el Pentágono solicitó a sus expertos en el año 1983, donde anuncia que "parte de la reeducación de las políticas surgen de un cálculo relativamente simple. Se estima que el número de conflictos pequeños aumentarán considerablemente, por lo menos en las próximas dos décadas. Se considera inadecuado el inventario de la capacidad doctrinaria, de equipo, organización y entrenamiento".⁴

Sin embargo, complicando más el problema, es la diferencia en posiciones con respecto a cómo evaluar este tipo de conflictos donde radicaría un segundo nivel del debate sobre la política exterior. O sea, en primer lugar existe todavía la búsqueda de un consenso sobre la importancia estratégica que habrá que asignarles a los conflictos y después el tipo de "respuesta" político-militar a ser aplicada. Dejando el segundo aspecto momentáneamente a un lado, analicemos brevemente el primero.

Al principio de la Administración Reagan —para ser más precisos, durante su campaña electoral— se elaboró un documento, cuyo contenido se considera clave por revelar los nuevos términos de la política futura. En el documento, comúnmente conocido en América Latina como el *Documento Santa Fe*⁵ se ve claramente la preocupación central del momento:

Las libertades fundamentales y los intereses económicos propios requieren que los Estados Unidos sea y actúe como una potencia de primer orden. *La crisis retórica*. La falta de habilidad para proteger nuestros valores y creencias fundamentales nos ha llevado a la situación actual de indecisión e impotencia y ha llevado a que la propia existencia de la república esté en peligro... Es hora de tomar la iniciativa. Una política exterior integral y global es esencial.⁶

El documento continúa con una elaboración sobre la importancia de los conflictos dentro de Asia, África y sobre todo América Latina, proponiendo líneas para el desarrollo de una política de enfrentamiento. El valor estratégico que se le atribuye a los conflictos basta para que sus autores califiquen a la época actual como la "Tercera Guerra Mundial". Para ellos la verdadera guerra que librarán los Estados Unidos en defensa de su seguridad nacional ya empezó. De aquí que la

existencia de Nicaragua revolucionaria —cuyo peligro en términos geopolíticos es cuestionable— resalte como central para esta "cruzada del internacionalismo ideológico".

Efectivamente, todo país en el que surjan conflictos que amenacen el *status quo*, se convierte en candidato a integrar la lista de los "intereses vitales y prioritarios" de Estados Unidos.

La creciente influencia del grupo político de los neo-conservadores durante los dos últimos periodos presidenciales, quienes privilegiaban lo ideológico en la apreciación de los conflictos, tiende a profundizar el giro de las propuestas doctrinarias.⁷ Esta perspectiva, al redefinir los términos del enfrentamiento estratégico, casi por definición obligará al gobierno de los Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas a asumir un papel activo en cada uno de los conflictos de ultramar. En una declaración reciente de la posición neo-conservadora con respecto a lo mismo, dicen:

La distinción entre las ideas religiosas y las ideas políticas se anula. Esto es lo que queremos hacer entender al decir que vivimos en una era de "ideología"... de ideas políticas que respizan aspiraciones quasi-religiosas y contraen compromisos quasi-religiosos, por esto, la falta fundamental de la visión diplomático-académica del siglo XX es su aversión a admitir que el conflicto básico de nuestros tiempos —entre la Unión Soviética y los Estados Unidos— es ideológico.⁸

Muchos de los críticos a esta posición advierten que así Estados Unidos tendría que involucrarse en innumerables conflictos a lo largo y ancho del planeta. En compromisos de esta naturaleza es difícil garantizar que su manejo quede dentro de un margen de "participación limitada", especialmente de las fuerzas militares propias. Este tipo de premisa ideológico-moral promovería el involucramiento norteamericano, con un grado de "misión a cumplir", que luego imposibilitaría la búsqueda de salidas pragmáticas si el conflicto llegara al nivel de una conflagración mayor. Semejante postulado implicaría para los Estados Unidos una sobrecarga dramática de su capacidad político-militar.

Si a lo ideológico se agrega el hecho de que el pensamiento de la nueva derecha suele incorporar la lógica de "suma-cero" en su pensamiento estratégico (según la cual cualquier cambio del *status quo* en un país significaría automáticamente una ganancia para un poder en desmedro del otro), teóricamente los niveles de compromiso se acrecientan. De esta forma, concebir los acontecimientos mundiales en un marco de excesiva polarización entre el Este y Oeste obliga a los Estados Unidos a intervenir globalmente para mantener su propia credibilidad.

4) Kupferman y Taylor, *Strategic Requirements for the Army to The Year 2000*, págs. 45 y 47; capítulos 10, 11 y 14. (Traducción del autor).
5) Comité de Santa Fe, "Una nueva política inter-americana para los años ochenta". En: *Revista Estudios* número 78, Uruguay, marzo de 1981.
6) *Op. cit.*, págs. 21-22.

7) Ver: Ana María Ezcurrea, *La Ofensiva Neo-Conservadora*, IEAPALA, (Madrid, 1982); y Holy Sklar, *Reagan, Thatcherism and the Neo-Liberals*, (Boston, 1986), capítulo 2.
8) Irving Kristol, "The War of Ideology", en *The National Interest*, no. 1 (Fall 1985), págs. 81 (educción del autor).

La influencia de este pensamiento ha penetrado todos los poros de la política norteamericana, pero el que nos concierne es el ámbito de la política exterior, por ser precisamente aquí donde los neo-conservadores comienzan a poner su empeño.

Que lo anterior sea o no la razón de la aparente mayor coherencia y convergencia observada en torno a la política de Reagan, aunque im-
portante, más lo es el hecho de que comienzan a consolidarse operativa-
mente en forma significativa. Un análisis de las diferencias entre portavo-
ces del Ejecutivo de Reagan (Weinberger/Schultz) indica mayor conver-
gencia a partir del inicio de su segunda administración. El hecho de que
el Ejecutivo haya podido incrementar la ayuda a Guatemala, Honduras
y, sobre todo a El Salvador en su segunda Administración, sin ni siquie-
ra propiciar un debate, indica la misma tendencia. Lo más relevante
para el caso de Centroamérica se refleja en la disminución de la oposi-
ción en el Congreso, culminando con el apoyo de los US\$100 millones
para la contra nicaragüense.

No es sino hasta el año 1985 en que la llamada "Doctrina Reagan",
comienza a presentarse como un cuerpo de pensamiento político, apa-
rentemente más coherente, que orienta el accionar del ejecutivo norte-
americano, tanto en el Tercer Mundo, como domésticamente.

A mediados de 1985 (junio y julio) se comienzan a ver los signos
de avances internos que darán paso a la nueva doctrina. En un período
de pocos días, la resistencia legislativa (demócrata sobre todo) en defen-
sa de posiciones ganadas y mantenidas durante años se resquebrajó.
Se tomaron cuatro medidas que constituyeron el inicio del giro legisla-
tivo:

- 1) Se deroga la prohibición legislativa de diez años de ayuda militar a los contrarrevolucionarios de Angola (Enmienda Clark 1974).
- 2) La Cámara Baja, en un reverso dramático, apoya la ayuda "humanitaria a la contra de Nicaragua".
- 3) Por primera vez, se inicia la ayuda, de manera pública, a la resis- tencia anti-comunista en Camboya.
- 4) Y, por primera vez, se vota públicamente para mantener el finan- ciamiento a los contrarrevolucionarios en Afganistán.

En un aparente abandono de posiciones previas de su propia admi-
nistración, el Presidente, por medio de varios discursos propios y de
miembros de su gabinete, define lo que serán los nuevos parámetros
para su "doctrina". Ya no se plegará a la defensa de las dictaduras
"autoritarias" como el mal menor frente a las "totalitarias". La política

9) Ronald Reagan, "State of the Union Speech" (febrero de 1985) y su discursó "Freedom, Global Peace and Regional Security" (marzo de 1986); George Shultz, "America and the Struggle for Freedom", ante el Commonwealth (San Francisco, marzo de 1986).

que hasta el presente había sido justificada por el famoso escrito de Jeane Kirkpatrick, será reemplazada por nuevas orientaciones destina-
das a "condenar con una política activa a las dictaduras de derecha y de izquierda".

Esto significa que Washington debe prepararse para propiciar cambios de gobiernos aliados, cuando estos estén amenazados por el descontento social interno, y presionados por la opinión internacional. Se trata de preservar —en última instancia— el *control político* de los países en cuestión.

Tampoco se insistirá en manejar de manera "encubierta" los obje-
tivos y la implementación de las guerras contra-revolucionarias auspicia-
das por los EE.UU. Al contrario, la Administración propone, con su planteamiento doctrinario, elevar al nivel de una política oficial y pública lo que antes había sido el "trabajo" secreto de la CIA. Hoy se hace necesario no solamente aumentar y legitimar este tipo de prác-
ticas políticas, sino convertirlas en una bandera de la libertad occiden-
tal.

En concreto, la Doctrina Reagan propone cuatro puntos fundamen-
tales, el primero visto como piedra angular:

- 1) Promocionar y apoyar la oposición política y militar contra los gobiernos revolucionarios del Tercer Mundo (de manera descubi-
erta y encubierta).
- 2) Intervenir en situaciones potencialmente revolucionarias, para conducir de manera controlada los cambios que se generen, de forma que se salvaguarde la esencia del régimen en el poder.
- 3) Empezar una campaña anti-terrorista, y
- 4) reservar, para revoluciones inminentes o consumadas, pero alta-
mente vulnerables, el poder de la intervención directa y masiva de las fuerzas estadounidenses.

Para Reagan, este conjunto de medidas constituirán un paso clave en la toma de la *ofensiva estratégica* contra los movimientos de libera-
ción, lo que según su interpretación significa ir contra el "expansionis-
mo soviético" (en los límites del imperio). Por fin las preocupaciones a finales de los años setenta lograron dar una respuesta a la ola de cam-
bios en los "países pobres" y al creciente anti-americanismo.

Como lo comenta sintéticamente Stephen S. Rosenfeld en un artículo reciente, donde el pensamiento reaganiano muestra el sobre-
dimensionamiento del factor externo en los conflictos locales:

Fue precisamente ahora cuando la Doctrina Brezhnev de 1968 asumió una nueva dimensión en la mentalidad americana. En tér-
minos más exactos, la doctrina Soviética original de liberación na-
cional —quier país es candidato (fair game) para la revolu-

ción" - fue y sigue siendo la más amenazante para el Occidente. Sin embargo, es la versión Brezhnev de esta doctrina - "una vez parte del bloque socialista, siempre parte" - la que fue percibida como particularmente insidiosa e inconveniente por la implicación de que el Oeste debería mantenerse de brazos cruzados, mientras la Unión Soviética devoraba un lugar tras otro. 10

El centro de las preocupaciones de los neo-conservadores de la administración Reagan es precisamente la noción de la *irreversibilidad*. La doctrina actual se construye alrededor de un compromiso de no "perder" ningún país más (la concepción asume que los cambios no controlados en los países del Tercer Mundo implican su ingreso automático a la esfera de influencia de la Unión Soviética; como fenómeno inevitable).

Visto como "respuesta" a las doctrinas soviéticas, la Doctrina Reagan es un intento de "retomar la iniciativa estratégica" en aras de lograr la *reversibilidad histórica* de la ola de movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo. Y, donde sea posible, intentar volcar favorablemente la relación de fuerzas adversas en el seno de algunos procesos que ya han escapado a su control, como es el caso de Nicaragua, Angola, Campuchea, y Afganistán. 11

La propia Administración se propone el cambio de una política percibida como contención pasiva por la de contención activa. Al dotar a algunas de las fuerzas contra-revolucionarias de tres contingentes con recursos militares, económicos, entrenamiento y logísticos, sumado al hecho de proporcionarles un cúmulo de recursos propagandísticos de gran envergadura ("lobbies", intemos, acceso a medios de comunicación, asesoría, para proyectar mejor su imagen internacional, fomento del apoyo de sectores privados en los EE.UU., etc...) existe el intento de convertir las fuerzas activas, dinámicas y sobre todo legítimas.

Sin embargo, juzgar la doctrina Reagan comparándola con las doctrinas de las administraciones anteriores, es hacer un juicio sobre la intención, contraponiéndola a hechos consumados con algún grado de distanciamiento, lo cual permite "medir mejor" los resultados. Los fracasos de Tnam, Kennedy, Johnson y Nixon, son evidentes. Lo de Reagan está a prueba (aun en medio del escándalo del Irán-Contragate).

El efecto más claro que se discierne hasta ahora es que la doctrina eleva enormemente los costos de la mera existencia de los gobiernos revolucionarios. La dimensión de la campaña de legitimación se ve, junto con el fortalecimiento militar, como el intento de forzar su de-

rumbe revolucionario como fenómeno aparentemente causado por la incompetencia interna. Esto explica el esfuerzo de proyectar la imagen de las fuerzas contrarrevolucionarias como "interlocutores válidos", involucrados en "guerras civiles".

Vista desde la perspectiva histórica de los EE.UU., es una política diseñada a limitar el uso directo de las fuerzas militares propias en los conflictos del Tercer Mundo. Pero, como se dirá más adelante, es a cambio de ampliar sustancialmente la injerencia norteamericana en la vida política nacional de los países en cuestión. Es decir, es el aparato militar, más el uso de todos los demás instrumentos de influencia y presión de Estados Unidos, lo que se utilizará contra el "adversario".

Lo que aparece como un retorno parcial a políticas previas, puede esconder diferencias cualitativas importantes para descifrar la correcta dimensión de lo actual.

Primero, y de mayor importancia, es el hecho de que la propuesta de la Administración hoy día es un intento por responder a la crisis del sistema político-económico mundial, hegemonizado tradicionalmente por los Estados Unidos, consolidado a partir de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el *contexto* en que surge la doctrina de esta administración le otorga a la misma una distinción relevante.

Este contexto, para fines de nuestro análisis tiene dos ejes principales, íntimamente relacionados: la situación histórica de los EE.UU. en el mundo, y el avance, maduración y éxito de las revoluciones populares, particularmente en Centroamérica. 12

En cuanto a los Estados Unidos, se puede decir que Reagan retoma un conjunto de políticas parecidas a las de los años cincuenta, cuando existía en los EE.UU. una clara superioridad nuclear y una tremenda solidez económica. El problema es hacerlo hoy, cuando "... el primero no existe y el segundo está desapareciendo". La capacidad económica necesaria para sostener la implementación futura de esta política no es la misma que antes. Uno de los críticos de Reagan resalta un indicador económico:

En 1945 los EE.UU. producían aproximadamente la mitad de la producción manufacturera a nivel mundial, en 1953 todavía era una gran cantidad el 44.7%. Sin embargo, para 1980 la producción estadounidense significa solamente el 31.5% de la manufactura mundial, y es probable que esta cifra bajará hasta el 20% para fines del siglo. Por otro lado, los compromisos de los Estados Unidos han aumentado considerablemente, al asumir responsabilidades en el Golfo Pérsico y Centroamérica. 13

10) Stephen S. Rosenfeld, "The Guns of July", en *Foreign Affairs* (Spring 1986), págs. 69-814; (Traducción del autor).
11) Eduardo Luis Molina y Vedia, "Los Conductos de B. Intensidad y el Mito de la retribución de la historia", en *Paroquia no. México*, Mayo-Junio de 1986), pág. 15.

12) Ernst Evans, "Revolutionary Movements in Central America: the Development of a New Strategy", en *Rift and Revolution: the American Imbroglio* (Washington D.C. 1984).
13) Christopher /ne, "The Real Conservative Agenda", en *Foreign Policy*, (Spring 1986), pág. 31. (Traducción del autor).

Estados Unidos ha sido y persiste en ser indeciso sobre el uso de la fuerza en la conducción de la política exterior. 15

En el caso de Centroamérica se puso a la orden del día el problema, provocando la necesidad de la creación de la Comisión Bipartidista, conocida como la Comisión Kissinger. Ya para 1983 el problema de las divergencias sobre cómo resolver los conflictos en la región se había demostrado capaz de producir, no consenso, sino mayor división en el pensamiento norteamericano ya de por sí fraccionado.

El segundo tema de la crisis de confianza tiene más relación con el rechazo, por parte de la cultura política norteamericana, al manejo secreto de la política. Con raíces en una larga tradición de lo público y como parte de la auto-imagen del funcionamiento democrático del gobierno, lo secreto tiene una connotación turbia. Las revelaciones sobre el papel de la CIA en la guerra de Indochina y sobre todo el nivel de corrupción revelado por Watergate, provocaron una erosión de la confianza hasta entonces desconocida.

Precisamente, estas experiencias son las que han sido revividas por el dilema de Centroamérica, incitando a la continuación del debate a todo nivel: en el Ejecutivo, el Pentágono, el Congreso, la opinión pública, etc. sobre los límites aceptables del uso de las fuerzas armadas y el grado tolerable de secretividad en su aplicación. En gran medida, la Doctrina Reagan se orienta no sólo dentro de los Estados Unidos, a reducir, sino a eliminar la influencia doméstica de estos "problemas", lo que se ha llamado el resquebrajamiento del "Síndrome de Vietnam".

Un último aspecto del nuevo contexto para los Estados Unidos, que refleja la pérdida de liderazgo político e influencia sobre los países del Tercer Mundo, es la erosión a su apoyo dentro de los foros internacionales. Esto se evidencia al observar las posiciones cada vez más hostiles que asumen los países del Tercer Mundo contra las posiciones de los EE.UU. Desde 1979, cuando los EE.UU. perdió su hegemonía histórica en la OEA, con el rechazo a la petición del Secretario de Estado, Cyrus Vance, de apoyar una intervención en Nicaragua, sigue una tendencia de polarización creciente; en las sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en los discursos y propuestas de los países del Movimiento no-alineado, y últimamente con la decisión a favor de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

B) LA NUEVA VISION CONTRA-INSURGENTE NORTEAMERICANA; LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD (GBI)

Esto nos conduce al segundo aspecto del impacto de la guerra de Vietnam sobre el pensamiento doctrinario, o sea, sobre cómo conducir

15) Richard Luedtke, "Foreign Policy Agenda", en *Agenda* (Spring 1985), págs. 3. (Traducción del autor).

Un segundo punto de orden general es el hecho de que las propuestas de Reagan existen en una realidad política pos-Vietnam, la primera guerra político-militar en la historia de esta nación. Los efectos de la guerra de Vietnam podrían ser tratados en dos aspectos para fines de nuestro análisis: los efectos que tuvo sobre la política interna dentro de los Estados Unidos, y segundo, el impacto que tuvo para el pensamiento cívico-militar sobre cómo conducir una guerra contra-insurgente. Por ahora se trata de lo primero.

Producto de las experiencias de Vietnam, el gobierno, las Fuerzas Armadas y la sociedad estadounidense en general han sufrido dos crisis que condicionan la formulación de su política exterior hoy en día: 1) se rompió por primera vez el *consenso nacional* sobre el qué hacer en el Tercer Mundo, y 2) se produjo una crisis de confianza en la capacidad de liderazgo del gobierno, exacerbada por todo el fenómeno de Watergate. 14

La primera condición heredada es reiterada de manera pública y constante como un obstáculo todavía presente en la toma de decisiones para el exterior. El Senador Richard G. Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores lo vuelve a remarcar en una petición de apoyo a la política de Reagan en la primavera de 1985:

... parece claro que los Estados Unidos no se ha recuperado totalmente de la guerra Vietnam. Tampoco se ajusta completamente al papel que le definen en el mundo, su fuerza económica, su geografía y sus intereses. Antes de Vietnam, se compartió ampliamente algunas premisas sobre lo que eran los intereses nacionales y las amenazas potenciales sobre ellos. Existió algún grado de consenso sobre las soluciones apropiadas a nuestros problemas. Uno de los costos de Vietnam fue el resquebrajamiento de este consenso. Los

14) Con el debate que resurge ahora sobre la Doctrina Reagan se demuestra que a pesar de haber dado un paso hacia el consenso partidista (de ubicar a Centroamérica dentro de los intereses de la seguridad nacional y el subsecuente fin de la aprobación de fondos) que logró la propuesta de la Comisión Kissinger, el fraconamiento del consenso norteamericano es un fenómeno más profundo, se remonta a las diferencias producidas después de la guerra de Vietnam y son múltiples, con caracterizaciones diferentes, según la perspectiva de quien los analiza. Un ejemplo de la gama de diferencias sería entre: los ideólogos vs. los geopolíticos, o idealismo vs. realismo, unilateralismo vs. multilateralismo, conservadores reales vs. los neo-conservadores, los aislacionistas vs. intervencionistas, neo-aislacionistas vs. neo-intervencionistas, etc. . . . A partir de una lectura del debate sobre la política exterior se revela que el *continuum* político ha corrido hacia la derecha, convirtiendo en inútiles las connotaciones tradicionales de liberal y conservador. Además, se vislumbra que no sólo hay diferencias de posiciones respecto a las premisas contractas para una política estadounidense, sino que ya existe una crisis conceptual en la misma elaboración de estas posiciones.

Para ver una parte de esta discusión: Irving Kristol, "The War of Ideology" en *The National Interest*, no. 1 (Fall 1985), 6-15; Robert Tucker, "Isolation and Intervention", *idem*, 16-25; Christopher Layne "The Real Conservative Agenda" en *Foreign Policy* (Spring 1986), 73-93; Charles Krauthammer, "The Poverty of Realism" en *The New Republic* (febrero de 1986), 14-18; Alan Tonelson, "The Real National Interest" en *Foreign Policy* (Spring 1986); Al Jaffe, "Crackpot Moralism, Neo-Realism, and U.S. Foreign Policy" en *Foreign Policy Journal* (Spring 1986), 251-275; Stephen Rosenfeld, "The Guns of July", 698-714.

Con base en lecciones propias y ajenas, se acepta que "es posible que el enemigo emplee una combinación de medidas políticas, económicas, psicológicas y militares; entonces el gobierno tendrá que hacer lo mismo para derrotarlo".¹⁷ La doctrina emergente propone ampliar sustancialmente el campo de acción, limitado tradicionalmente a las instituciones militares, pero insiste que debería ser el aspecto político el que oriente todo el conjunto.

El objetivo principal no se obtendrá, como en las guerras convencionales, con el énfasis puesto en la eliminación física del enemigo, movimientos de liberación o gobiernos revolucionarios —sino con *deslegitimarlos, socavarlos y aislarlos hasta que dejen de considerarse como una alternativa política posible o estable.*

Esto se traduce, a nivel práctico, en que es la población civil la que se convierte en el objeto estratégico de la guerra, no para eliminarla, sino para neutralizar su lealtad a la guerrilla o a cualquier fuerza revolucionaria. En el mejor caso, ganarla para el proyecto contrainsurgente o contrarrevolucionario según corresponda. El nuevo quehacer militar se extiende, al incorporar tareas que influyen sobre la población fuera de lo tradicionalmente militar, mientras se exige una mayor politización de la misma actividad militar. La propuesta de este tipo de "guerra total a nivel de la base" (*total war at the grass roots level*) implica la participación en la guerra contrainsurgente de instituciones no militares.

Además, de representar un problema que tendrá repercusiones todavía incalculables, *por implicar un cambio en la naturaleza intrínseca del soldado* (norteamericano y local), significa que todas las instituciones militares y no-militares que participarán en este esfuerzo deben hacerlo de manera altamente coordinada. Esta ha sido otra de las lecciones de la experiencia de Vietnam.¹⁸ Un requerimiento previo a la efectividad de la coordinación es que toda institución tenga una comprensión conceptual homogénea sobre este tipo de guerra, y luego un nivel de coordinación constante y permanente.

Enfrentar seriamente los conflictos de "baja-intensidad" refleja, para algunos, lo profundo que puede ser el reto para todo el sistema de política exterior norteamericano. Esto se expresa al enfrentar problemas complejos, con muchos niveles y dimensiones a manejar simultáneamente, y sobre todo, que su "tratamiento" no puede ser de corto plazo. De esta manera, la GBI comienza a dominar la formulación de

17) Frank Kinson, *Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency, Peace-Keeping* (Harrisburg, Engleand 1971).

18) Richard A. Hunt y Richard Shultz, Jr. (editors), *Lessons from an Unconventional War: Reassessing U.S. Strategies for Future Conflicts*, (New York, 1983), introducción, y Sam C. Sarkesian, "Organizational Strategy and Low-Intensity Conflicts" en *Special Operations in U.S. Strategy* (Washington D.C., 1985) págs. 261-289.

toda la política hacia la región, considerada conflictiva. La respuesta tiene que ser totalizante, integral y debería de abarcar cada uno de los aspectos de la vida que pueda influir en la percepción del futuro de la población involucrada.

Frente al reconocimiento que el cambio es necesario, incluso inevitable, una línea del pensamiento militar sobre la GBI declara que la iniciativa estará con aquellos que logren influir o explotar el proceso de cambio. Dicho de otra manera por distintos autores, frente a la tendencia exitosa de los movimientos de liberación nacional, lo que hay que lograr es "un cambio de actitud" en la población de los países locales, acompañado por el mismo proceso en la opinión internacional.

Se trata entonces de lograr una nueva versión de reformas para bloquear o disputar banderas a las revoluciones: disputar a las fuerzas revolucionarias su base social de apoyo, lo que implica incitar reformas con un tipo de represión que no la enajene. Surge entonces la necesidad de implementar una nueva forma de represión.

Esencial para la GBI es pasar de la *represión masiva*, que no logra una distinción entre guerrilla y población civil (entre cuadro político de un gobierno revolucionario y un ciudadano) a la *represión selectiva*. Esta regla de la guerra debería aplicarse en todo el ámbito nacional del conflicto, no sólo en las llamadas "zonas de guerra". El grado de éxito del cambio hacia lo selectivo, está directamente relacionado con la profesionalización de las fuerzas armadas y policiales y el mejoramiento de los métodos de inteligencia sobre el "enemigo".

La GBI propone la utilización de medios tecnológicos más sofisticados para incrementar la capacidad técnica de la inteligencia, a todos los niveles.

Esto significa, al interior de los países, la organización y entrenamiento de las fuerzas de seguridad local y a nivel de la región, como en el caso de Centroamérica, la integración de la inteligencia regional.¹⁹

Particularmente en estas áreas se presenta una especie de división del trabajo entre las fuerzas locales y las fuerzas de los Estados Unidos. De hecho, la propuesta significa la incorporación del sistema de seguridad

19) Véase también: "Vuelos espías para detectar movimiento de tropas, guerrilla, líneas de abastecimiento, por ejemplo, en la zona de la frontera de equipo de comunicación para las fuerzas contrainsurgentes y contrarrevolucionarias, instrumentos sofisticados para el rastreo de información electrónica. También instrumentos sofisticados para el rastreo de inmigración y aduana de los países regionales para el control de movimiento de personas determinadas dentro de la región. Ver: "Memorandum del Dept. de Estado al asesor de Seguridad Nacional, Robert MacFarlane, sobre financiamiento de actividades subversivas en Centroamérica", (Washington D.C., junio de 1983), págs. 4-8; Joanne Oman, "The Winds of War Blow through Washington", en *Washington Post Weekly Edition*, 28 de julio de 1986, págs. 2; y Capitán Ricardo Wheelock Román, "Preparaciones de la Intervención", *Barricada*, 18 de julio de 1986.

vas al Tercer Mundo, tiende a prestarse a confusiones cuando es visto desde la perspectiva de los países objeto de ella. Aunque sea británico en su origen, lo de *conflicto de baja intensidad* es un término empleado por los norteamericanos partiendo, según su perspectiva, del espectro de conflictos que un poder imperial podría enfrentar en el mundo de finales del siglo veinte. Si la gama posible para los Estados Unidos abarca, por el lado de la alta intensidad, una guerra nuclear global, pasando por las "guerras nucleares limitadas", etc., entonces los enfrentamientos armados al otro extremo del espectro, entre fuerzas gubernamentales locales y movimientos de liberación nacional, son considerados de relativa baja intensidad.

La "intensidad" mide entonces el empleo relativo de armamentos, capacidad de fuego, tiempo y despliegue de tropas; o sea, es una medición de factores meramente militares.

El calificativo, sin embargo, es poco útil para describir la naturaleza de una guerra política; uno, por el hecho de medir en función de distintos grados de despliegue militar, lo que puede conducir a la conclusión errónea de que es simplemente una guerra convencional en menor escala, y segundo porque, como hemos mencionado, desde la perspectiva de los países-objetivos, su aplicación no resulta ser una guerra de "baja" intensidad, por los efectos internos que provoca en países pequeños y empobrecidos.

Existe una gran variedad de definiciones para caracterizar los conflictos de baja-intensidad. Esto dificulta la precisión conceptual para lo que debiera ser una doctrina moderna de guerra, capaz de desarrollar los elementos designados como centrales para ella: la contra-insurgencia, la "pro-insurgencia" (esfuerzos contrarrevolucionarios), el anti-terrorismo y últimamente el "narco-terrorismo".

Es a partir de la interpretación socio-política de la "desobediencia civil", la "insurgencia" y el "movimiento popular" o "revolución", que se elabora el cuerpo de pensamiento doctrinario de la GBI. Es el aspecto político-ideológico al que se le ha asignado una mayor importancia, como se verá más adelante. La identificación correcta del "problema" debería generar la respuesta adecuada. En el caso de este tipo de guerra, la esencia de la propuesta (en términos técnicos-metodológicos) es la de usar contra ellos las mismas tácticas de los movimientos de liberación, y así garantizar una política que opere en los mismos planos donde tiene influencia el movimiento en el plano local, nacional e internacional.

La confianza en la posible victoria para las fuerzas contra-insurgentes y contrarrevolucionarias se basa en que el gobierno de los Estados Unidos cuenta con mucho más medios y recursos para revertir la lógica de este tipo de guerra, contra sus autores.

una guerra contra-insurgente. Sin agotar el tema, mencionamos que una de las lecciones militares más significativas derivada del enfrentamiento en Indochina fue que el empleo masivo de una capacidad militar superior contra un adversario compuesto de fuerzas irregulares y populares, no constituye una garantía de victoria. Lanzar una guerra convencional contra fuerzas guerrilleras significaba enfrentar un tipo de lucha con formas inapropiadas, que en última instancia resultaban hasta contraproducentes.

En el transcurso de la misma guerra de Indochina, se dieron intentos por aplicar planes y programas contra-insurgentes en Vietnam del Sur (en dos etapas: 1961-1963 y luego desde 1969 hasta 1975). Los estudios recientes demuestran que estos fueron relegados a segundo plano, al ser implementados paralelamente con la aplicación de esquemas de guerra convencional que desembocaron en la escalada del involucramiento masivo de las fuerzas estadounidenses. Tanto fue así, que al ejercicio doctrinario se le llamó "la otra guerra".

Otra conclusión que sacaron las fuerzas armadas de los Estados Unidos es que este tipo de lucha es fundamentalmente política, donde lo que hay de por medio no puede combatirse sólo en el plano militar. Hacia falta entonces un replanteamiento estratégico. En otras palabras, era necesario reevaluar la doctrina de la contra-insurgencia, perfeccionarla y, sobre todo, elevarla a nivel de importancia estratégica. Mantenerla doctrinariamente como secundaria (*as a doctrinal sideshow*) sería negar la propia naturaleza de la guerra y correr el riesgo de volver a cometer los mismos errores.

Las implicaciones de tal cambio representan un reto serio para una institución armada como la de los EE.UU. cuyo *modus operandi* se forjó en base al pensamiento y a la práctica de dos guerras convencionales. Agréguese que al final de la guerra de Vietnam, las pocas estructuras que apenas se profesionalizaron en las actividades contra-insurgentes habían sufrido casi un colapso institucional.¹⁶

Con el resurgimiento de "los conflictos" en el Tercer Mundo y de acuerdo a la lectura ideológica de su causalidad, se crean las condiciones para el resurgimiento de los estudios y propuestas de política militar que se habían gestado a la sombra de Vietnam. Existe hoy una coincidencia estrecha entre lo que los ideólogos proponen para la política global, con el pensamiento doctrinario militar, para enfrentar los "conflictos de baja-intensidad".

El término "conflicto de baja intensidad" recientemente usado con mucha frecuencia dentro de la literatura y los debates y políticas rela-

16) Para mayor información, sobre este tema ver: Col. John D. Waghelstein, "Post-Vietnam Counterinsurgency Doctrine", en *Military Review*, (mayo de 1985); Frank R. Barnett, Hugh B. Tovar y Richard H. Shultz (editores), *Special Operations in US Strategy National Defense* (Washington D.C., 1983).

y la zanaforia"; la Doctrina Kennedy de reformas, con lucha contra-insurgente, terminó por priorizar la fuerza sobre las reformas, la seguridad por sobre el desarrollo, los ejércitos por sobre las organizaciones políticas. Todo esto articulado en una doctrina coherente, conocida como la Doctrina de la Seguridad Nacional.

A) CONTRA-PARTIDA NACIONAL

a. Los elementos básicos generales de la Doctrina de Seguridad Nacional

Los conceptos básicos, imágenes y objetivos de la Doctrina de Seguridad Nacional se articulan sobre el siguiente postulado: todas las democracias occidentales, pero muy especialmente las de los países del llamado Tercer Mundo, se encuentran bajo el asedio permanente de un poder hostil *supra-nacional*: el comunismo internacional. Este, a su vez, es la expresión manifiesta del expansionismo soviético. La crisis global permanente que esta situación genera se presenta a nivel de cada país periférico como una *guerra permanente*. Esta forma abierta y declarada del enfrentamiento puede tener distintos niveles de desarrollo e intensidad en el seno de cada sociedad en particular, pero por su naturaleza y origen, está siempre presente.

En la base de esta confrontación se encuentra la pugna esencial: la disputa por la supremacía de dos sistemas, concebidos como incompatibles e irreconciliables, el "occidental cristiano" y el marxismo ateo²⁵, sin que medien espacios, ni matices.

Esta caracterización del enfrentamiento global, traducida al espacio nacional, define por su lógica al adversario a combatir. A diferencia del conflicto militar tradicional, en esta guerra el enemigo no es un extranjero luchando bajo banderas extrañas, sino un conacional portador de "ideas enemigas de la sociedad", a la que indefectiblemente se define como "democrática", con independencia de su carácter real. Este sujeto, al que se supone en permanente acción subversiva contra el sistema y sus valores, se lo califica como *enemigo interno o terrorista*, en dependencia de la imagen que se quiera explorar.²⁵

Este enemigo, astuto y solapado, puede disfrazar sus ideas e infiltrarse en todas las instancias del cuerpo social. De este supuesto, se desprenden dos consecuencias operativas importantes para los ejecutores de la DSN. La primera es que, no sólo son "enemigos" aquellos que explícitamente se identifican con el cambio social y las organizaciones

25) Jorge V. Tapia, *El Terrorismo de Estado. La doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur* (México, 1980), pág. 118.

que lo preconizan, sino cualquiera que no adhiere a las políticas represivas que la seguridad nacional exige. La segunda es que, para combatir eficazmente a este enemigo difuso, es preciso asumir, como frentes de guerra, todos los espacios de la vida nacional en que este enemigo puede actuar, el "frente" económico, diplomático, sindical, religioso, etc.

b. Militarización y dependencia

La Seguridad Nacional, definida como la defensa de una frontera ideológica, se convierte en el *principio motor* de la vida nacional, en forma exclusiva y excluyente; y las Fuerzas Armadas, su expresión suprema. La combinación de ambos elementos determina la *imposición de la institución, fuerza y estilo militar en los procesos políticos regulares*, por constituir éstos otras tantas formas de la contra-insurgencia.

La lógica de la DSN conduce fatalmente a que las Fuerzas Armadas se constituyan en detentadoras del poder político —directa o indirectamente— pero no al viejo estilo "caudillesco", ni como ámbitos o partes de las contiendas entre fracciones oligárquicas. *Esta militarización de nuevo cuño sustenta un proyecto nacional que asume como propio, y que se manifiesta independiente y por encima de las clases en pugna*. Por su naturaleza, sin embargo, el proyecto puede ser, diferente pero nunca antagonico con el de las clases burguesas dominantes. En los hechos, las condicionantes externas e internas que enmarcan la gestión política de estos ejércitos determinan que —salvo excepciones— terminen alineados con las posiciones más radicales de los sectores conservadores de cada espectro político nacional.

Argentina también ha sufrido intensa y extensamente este fenómeno, que se inicia en 1964 con el golpe militar comandado por Onganía, que tiene como expresiones clásicas, entre otras, a Argentina (1976), Uruguay (1973), y Chile (1973), país éste en donde la aplicación irreflexiva de la DSN ha adquirido dimensiones tremendamente radicales hasta la actualidad.

Una forma extrema de evolución posible, observable más propiamente en Centroamérica, por las características que señalamos más adelante, es aquella en que, en el ejercicio político, la condición de estos ejércitos, no sólo de aliados, pero en algunos casos de mandaderos de la administración norteamericana, determina un alineamiento absoluto, no sólo en el campo de las medidas propiamente militares, sino en todo el ámbito de las relaciones. Las imposiciones de "modelos de desarrollo", paquetes de ayuda altamente condicionados, medidas económicas recesivas, etc., en última instancia castigan duramente (y exclusivamente) a las capas más vulnerables, los sectores populares.

desgaste militar al mantener en movimiento constante a la guerrilla o en estado de alerta continua al ejército revolucionario, desgaste económico como consecuencia de lo mismo, etc.

El redimensionamiento de la guerra implica su necesaria prolongación. Se vislumbran nuevas etapas difíciles de determinar. Hay algunos factores que pueden contribuir a una lectura del desarrollo de la guerra en su nueva modalidad: al no buscar la eliminación física de su enemigo (el abandono de la idea de una victoria rápida); las fuerzas contrarrevolucionarias intentarán penetrar y debilitar primero sus retaguardias, las cuales son definidas también en términos políticos, no sólo militares.

Otro factor es la medición del avance en el montaje de la infraestructura para el sistema de seguridad regional, que, en el caso de Centroamérica, implica cambios en el rol del Comando Sur,²² su rearticulación con las bases militares norteamericanas en territorio estadounidense, el entrenamiento, equipamiento y fuego de las Fuerzas Especiales y la CIA para la expansión de sus funciones dentro de la región.²³ El tercer factor, quizás el más clave para mantener la opción de GBI vigente, es la readecuación conceptual y operativa de las Fuerzas Armadas y policiales locales, con el fin de hacerlas corresponder a su nuevo rol. En la jerga de la GBI es lo que se llama la *preparación total del área en conflicto*.

II. LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL (DSN), IDEOLOGIA DE LA CONTRA-INSURGENCIA

La contrapartida local (nacional) de la conceptualización norteamericana de seguridad para enfrentar los movimientos de liberación (GBI) es la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

Desarrollada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, e incorporando elementos de la geopolítica nazi²⁴ y de las experiencias contra-independencistas inglesas y francesas, ha servido de sustento ideológico, a partir de los años sesenta, a los ejércitos latinoamericanos para su inserción en la política activa. Convencidos que el anhelo libertario de los pueblos podía ser doblegado con la política del "garrot-

22) Raúl Leis, *Comando Sur Poder Hósti*, CEASPA, (Panamá, 1985) y "SWORD (Southern Command's Small Wars Operations Research Directorate) puts Curtin-Edge on US SOUTH COMMISSION", en *Southern Command News*, julio de 1986 25-71.

23) Ver: Alfonso Chardy, "Debate Grows in Washington on management of contra war", *New York Times*, 31 de julio de 1986, donde describe el futuro rol de la CIA en Nicaragua como "operational control, battle strategy and tactics communications, logistics, intelligence and combat advise". Ver también: Richard Halloran, "C.I.A. is Reported Set to Channel Aid to Contras", *New York Times* 17 de marzo de 1986; y Joanne Omang, "The Winds of War Blow Through Washington", abril de 1986, S.E.

24) Alvaro Britones, *Economía y política del fascismo dependiente* (México 1978), pág. 308.

dad de los países en conflicto, vía la tecnificación y el control de la inteligencia, dentro del sistema de seguridad norteamericano.

El otro componente central de la inteligencia, es el aspecto político-cultural, a incorporarse en las fuerzas estadounidenses. Aquí radica la clave para el avance de las nuevas modalidades de la GBI. Por la misma naturaleza política de la guerra, es una modalidad altamente dinámica, donde son necesarias constantes readecuaciones de programas de acción militar. Lograr percibir los "cambios de actitudes" o "grado de lealtad" en una población, medir el "éxito" de una operación psicológica significa para los norteamericanos (en este caso las Fuerzas Especiales), lograr un dominio del idioma y un conocimiento más profundo de la cultura de los países en conflicto, para poder mejorar su integración al medio e inmiscuirse en el conflicto.

No es casual la petición del Ministro de Defensa, Caspar Weinberger, para mayor entrenamiento lingüístico y cultural para las Fuerzas Especiales, en su discurso pronunciado en una conferencia sobre los conflictos de Baja-Intensidad (Enero de 1986).²⁰

El enfoque del accionar político-militar de la guerra de baja-intensidad demuestra un sesgo psicológico, el cual se refleja, aun a nivel teórico, cuando el pensamiento en boga señala que "(en estos conflictos) no existe la noción de una victoria por la fuerza de las armas. La victoria, en estos contextos, debe ser medida en cuanto se evitan ciertos resultados (indeseables) o, por cambios de actitud en el grupo objetivo".²¹ He allí el objetivo específico para con la población civil.

La modalidad principal de la GBI dirigida a las fuerzas revolucionarias en sí, sea guerrilla o gobierno, es de *guerra de desgaste o guerra de agotamiento*. De nuevo, el intento de utilizar las tácticas insurgentes contra ellos implica que los enfrentamientos tendrán por objetivo agotarles su capacidad operativa y funcional en todas las áreas donde han logrado éxito.

Factor común a cualquier guerra, el desgaste, en la GBI se diferencia por ser determinado políticamente. La búsqueda del desgaste, físico, psicológico, moral, y material estará siempre en función de deslegitimizar, socavar y aislar a las fuerzas revolucionarias de su base de apoyo, produciendo, en conjunto con el trabajo político-psicológico con las masas, su eventual debilitamiento y colapso, aparentemente desde dentro.

Traducido esto a todos los planos de la guerra, el desgaste cobra formas distintas en cada uno de ellos; desgaste diplomático para neutralizar la solidaridad internacional y aislar las fuerzas revolucionarias,

20) Discurso del Ministro de Defensa Caspar Weinberger en la Conferencia *La Guerra de Baja Intensidad*, Fort McNair (13-14 de Enero de 1986).

21) Robert Kupperman Associates, "Low-Intensity Conflict", p. 4.

Esta relación marcadamente unilateral no está exenta de contradicciones. El interés central que se manifiesta en las medidas "recomendadas" no siempre es coincidente con el de los sectores que detentan el poder. Más bien tiende a exacerbar las contradicciones de los grupos dominantes entre sí, y entre éstos y los sectores populares.

c. *Esencia antipopular y antidemocrática*

La imposición de políticas contrainsurgentes necesariamente implica el ejercicio de la represión contra los sectores propulsores del cambio de estructuras, cuyo núcleo se encuentra en los sectores asalariados, en los marginados del campo y la ciudad. La naturaleza de la represión, sin embargo, masiva o selectiva, está en función de varios factores, como son la capacidad de información y control de los aparatos de seguridad, etc.

Esta orientación de la represión constituye un apoyo insustituible para los sectores nacionales con pretensiones e intereses capitalistas, puesto que la represión, sometimiento y sometimiento violento de las masas trabajadoras y de sus organizaciones sindicales y políticas, permiten condiciones de exploración tales, que atentan o retardan la crisis de acumulación, que sufren estas economías, tanto por sus limitaciones estructurales, como por su inserción en el sistema mundial desde una posición periférica y dependiente.

En efecto, empujados por su particular concepción de la seguridad, la finalidad inmediata de los regímenes contrainsurgentes es impedir que los sectores más progresistas tomen o conserven el poder político. Para ello es legítimo y hasta necesario, tanto en tiempos de aparente paz, como de guerra abierta, la utilización de la totalidad de los recursos políticos, económicos, sociológicos y militares de la nación. Así, la supuesta seguridad se asocia indefectiblemente a la restauración de las relaciones de producción más rígidamente, a la afirmación y profundización, en última instancia, del modelo capitalista de producción.

El grado y magnitud de la crisis económica en cada país determinan el margen de maniobra de los "Gobiernos de Seguridad Nacional", para aventurar reformas que eventualmente pudieran incidir en la "base social de la subversión". La extensión de la crisis, sin embargo, y el papel dominante de los sectores oligarcas, impiden que estos gobiernos puedan otorgar la más mínima concesión a los sectores postergados.

La DSN postula que, frente a esta guerra tan particular, el Estado Democrático es incapaz de autodefenderse de las distintas formas de la subversión, con el sólo uso de sus instituciones y facultades. Es vulnerable a las doctrinas subversivas. De esta supuesta debilidad se deriva la noción de *democracia protegida*, o *democracia resista*.

Varios elementos componen esta noción. En primer lugar, las formas y profundidad democráticas (grados de democracia) estarán en función de la "amenaza" que las fuerzas anti-hegemonía constituyen para el sistema o para el sector en el poder. Es decir, la competencia democrática es restringida o eliminada, en la medida que puedan desarrollarse sectores alternativos al poder contrainsurgente en su seno.

En segundo lugar, las formas democráticas mismas, por ser en sí un valor de vigencia universal, deben de alguna manera reivindicarse y adoptarse, so pena de recibir la repulsa internacional. Ello, aunque éstas sean incompatibles con la guerra política que se libra dentro de la sociedad, y a pesar de que sus principios ("democráticos") sean la antítesis de la concepción militar.

Cuando no se puede evitar su adopción, por el costo político que implica, se le debe tergiversar hasta convertirla en un nuevo instrumento contra-insurgente. Especialmente, como instrumento de legitimación y aceptación para su modelo.

Esta particular noción de democracia asociada a los regímenes de contrainsurgencia, para ser funcional, requiere tanto de un juez que, estando por encima de sus instituciones, defina los "límites seguros" dentro de los cuales esta "democracia" puede operar, como de un aparato protector que esté presto a brindarle el resguardo oportuno. Ese papel lo han asumido las Fuerzas Armadas.

La forma que asuma este rol, los grados de tolerancia que se permitan a la democracia y los niveles del uso de la coerción (abierto o encubierto) dependen, tanto de la complejidad política de cada sociedad en cuestión (niveles de tradición y solidez democrática) y del desarrollo de las fuerzas armadas respectivas, como de la calidad y empuje del movimiento y organizaciones populares, entre otras.

d. *La DSN en Centroamérica*

En el caso de Centroamérica, este fenómeno, conteniendo sus elementos fundamentales, se presenta con particularidades propias tanto de carácter regional, como nacional, de cada país del área.

Así, aunque obedeciendo al mismo sustrato ideológico, la aplicación práctica de la DSN ha debido adaptarse a las nuevas condiciones históricas que enmarcan la crisis del Istmo, y que determinan algunas diferencias con los casos continentales previos.

En efecto, la potencialidad de los movimientos revolucionarios del Cono Sur se desplegó en sociedades políticas y cívicamente más desarrolladas; pero además, estos movimientos fueron enfrentados bajo el alero de la doctrina en análisis, por ejércitos modernos, profe-

sionalmente eficientes e ideológicamente preparados²⁶ y de larga tradición. Esto dio a estas fuerzas armadas mayores grados de autonomía relativa frente a los Estados Unidos. Lo anterior determinó, en combinación con otros factores, como la concepción de la guerra de liberación, las políticas de alianza, etc., por parte de las organizaciones populares que, por la violenta aplicación de la DSN, estos movimientos fueran, en el aspecto militar, prontamente desarticulados. (Casos de la Unidad Popular y MIR en Chile, Montoneros y ERP en Argentina, MLN Tupamaros, en Uruguay).

En estos casos, la presencia norteamericana no tuvo que manifestarse más allá de ser la fuente y apoyo ideológico y político de estos regímenes. En Centroamérica, Estados Unidos ha debido dar un paso más allá, y asumir con su poder el financiamiento, planificación y conducción de la DSN, con la consiguiente consecuencia de mayor dependencia en todos los campos: militar, político y económico, en que los casos extremos son El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Para el análisis regional del problema de la DSN, distinguimos tres sujetos principales: el gobierno de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas nacionales y los movimientos populares respectivos.

La fuerza dinámica inicial y determinante en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional es el poder político y militar norteamericano. Aunque las relaciones de este poder con la región tienen un largo registro histórico, el sesgo hacia la "seguridad", como eje determinante de la relación, constituye un rasgo relativamente nuevo, exacerbado a partir de la Revolución Popular Sandinista y del repunte de los movimientos insurgentes de El Salvador y Guatemala.

La lectura e interpretación que el *national security establishment* hace de la crisis centroamericana constituye, como se ha establecido en páginas anteriores, el puente ideológico con las instituciones militares locales.

Una vez delimitados los movimientos populares y sus luchas reivindicativas como amenazas para la seguridad de los Estados Unidos, por identificárseles indefectiblemente con el conflicto Este-Oeste, el objetivo consiste en crear dentro de cada sociedad los mecanismos que permitan, según el caso, evitar o erradicar el "peligro subversivo". En otras palabras, se trata de sustituir con fuerzas locales las fuerzas norteamericanas, asumiendo las primeras un rol activo en la defensa de los intereses de las segundas.

La interiorización a nivel local de esta interpretación permite la legitimación de las acciones que bajo los dictados de la Seguridad Nacional se desarrollan, toda vez que se presentan como esfuerzos

26) Brian Loreman et al., *The Politics of Antipolitics in Latin America* (Nebraska, 1975), pág. 14.

internos y de origen nacional. En última instancia, como se observa en casi todos los casos de la región, el resultado de la adopción y aplicación de los dictados de la DSN no es otro que preservar la hegemonía norteamericana y mantener la coherencia de un sistema de relaciones económicas que refuerza y reproduce las relaciones de dependencia. En otras palabras, este esfuerzo, que no es solamente militar, busca instalar "modelos estables" que restituyan la hegemonía burguesa en la sociedad y la hegemonía norteamericana en la región. (*Nation-building*).

De esta particular relación surge el segundo protagonista del drama centroamericano: *Las Fuerzas Armadas* de cada país.

A lo largo de un prolongado y complejo mecanismo de relaciones con el aparato militar norteamericano, no exento de presiones y manipulaciones, los ejércitos de la región han ido asimilando y haciendo propias las concepciones de *seguridad hemisférica* de los Estados Unidos. La adopción de este análisis, simplificado a un esquema maniqueísta de la sociedad y sus procesos, los llevó a asumir un rol activo y beligerante en la confrontación ideológica Este-Oeste, reduciéndola al micro-cosmos nacional y regional.

Para la región, o mejor para los ejércitos de ésta, el proceso de asimilación y adopción de la DSN ha estado condicionado por las características propias de cada país, y por ende, de cada fuerza armada, aunque, en un análisis a largo plazo, "las fuerzas armadas de la región han jugado un rol determinante en el mantenimiento del sistema de dominación y han ejercido una función rectora en la vida política".²⁷

El mayor grado relativo de injerencia-participación de estos ejércitos en el sostenimiento del sistema de dominación es también función, en este caso, del carácter autoritario y restringido de los sistemas políticos de la región, con excepción de Costa Rica.

Contraponiéndose a los dos poderes someramente descritos más arriba, se encuentra el movimiento popular, en su más amplio sentido, contra quien se dirigen enconadamente la colosal fuerza de la primera potencia mundial y la de sus representantes locales.

Es precisamente el lento, pero sostenido ascenso del potencial popular que, agudizado por su histórica marginalidad y explotación, irrumpe con fuerza revolucionaria en el escenario político centroamericano. Este hecho desencadena los mecanismos tendientes a privar a este sector social de su legitimidad y vigencia como sujeto político alternativo, portador de un proyecto renovador, independiente, de profundo contenido popular.

27) Gabriel Aguilera, "La dimensión militar en la crisis de Centroamérica", ponencia presentada a la Conferencia *La crisis centroamericana y sus implicaciones internacionales* en El Colegio de México - International Institute of Strategic Studies (México, 3 de mayo de 1985), pág. 4.

La crisis global del sistema de dominación capitalista se expresa principalmente en su incapacidad para resolver los problemas más graves de estas sociedades. A lo anterior se agrega una comprensión más profunda y generalizada de las causas de estos, por parte de quienes sufren sus efectos. Esto ha ido generando un consenso y una voluntad de cambios muy profunda. Las retrogradadas relaciones de poder y dependencia que convirtieron a los países del área en meras "repúblicas bananeras" que necesitan ser cambiadas si se desea tener acceso a niveles superiores de convivencia y desarrollo. En el seno de cada sociedad centroamericana se han desarrollado las condiciones y ha madurado la fuerza que permiten dar el salto. Sólo la presencia y acción de *elementos de fuerza exterior* a los procesos sociales de cada país, la intervención norteamericana, impiden la culminación "natural" de los respectivos procesos revolucionarios, o en este caso, más propiamente libertarios.

Efectivamente, durante las dos últimas décadas, las fuerzas armadas institucionales han sido confrontadas en forma creciente por organizaciones político-militares de cierta consistencia, que han constituido guerrillas. Este fenómeno se ha dado casi en toda la región, excepto nuevamente en Costa Rica, revistiendo mayor intensidad en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Como se sabe, en junio de 1979, la lucha entre el FSLN y la Guardia Nacional de Somoza se decide en favor del primero.

En El Salvador, la guerra de guerrillas entre el FMLN y el gobierno de ese país se incrementó y precipitó después del golpe de Estado que derrocó al gobierno del General Carlos Romero, en octubre de 1979. Actualmente, las guerrillas se han convertido en un ejército alternativo y la Fuerza Armada de El Salvador probablemente habría sido derrotada en ese período, si no fuera por la asistencia externa.

En Guatemala, las fuerzas de la URNG lograron un desarrollo considerable entre los años 1979-1981. Ello obligó al ejército guatemalteco a comprometerse en un gran esfuerzo contrainsurgente, particularmente después de los golpes de Estado de 1982 y 1983. En la actualidad, esa guerra continúa con tendencia prolongada, aunque dentro de un nuevo y expectante marco, determinado por la elección de un gobierno civil, que sin alterar básicamente la estructura de poder, crea una situación política más compleja que la persistente en una dictadura militar.

Desde el punto de vista de la guerra, y dentro del marco de la DSN, se han dado situaciones particulares en los países de la región donde ésta tiene injerencia.

En el caso de El Salvador, compartimos con Gabriel Aguilera la hipótesis que el rol hegemónico de las fuerzas armadas "vis-a-vis el conjunto de las clases dominantes, y de la sociedad en general, se alte-

ró por su incapacidad de ganar la guerra y su dependencia de fuerzas externas".²⁸

En el caso de Guatemala, en donde la estrategia contrainsurgente ha conducido a la entrega del gobierno a fuerzas políticas civiles, las Fuerzas Armadas mantienen su rol dominante. Una prueba de ello son las recientes denuncias del máximo líder del Partido Socialista Democrático de Guatemala, Mario Solórzano, según las cuales, desde el traspaso del poder al presidente democrata-cristiano Vinicio Cerezo, el 14 de enero de 1986, hasta junio del mismo año, cerca de cien personas murieron o resultaron heridas por la violencia política y 120 más han desaparecido. "La dictadura aún no ha terminado".²⁹

En el caso de los países no afectados directamente por la guerra, la forma regional de la DSN ha determinado una creciente militarización, como son los casos de Honduras y Costa Rica, donde, como sucede en este país, afecta profundamente su tradición civilista.³⁰

Podemos concluir, finalmente, que en Centroamérica se libra una guerra política, cuyo escenario sobrepasa los campos clásicos del enfrentamiento militar para invadir prácticamente todos los espacios de la vida social y política de las naciones.

Aunque esta guerra se expresa en formas distintas y tiene a nivel de cada país, desarrollos y tiempos diferentes, constituye un conflicto regional único. Esta unidad está determinada por la actitud norteamericana de responder globalmente a las diversas crisis nacionales con una estrategia única: la de *contra-insurgencia*. Esta condición obliga a enfrentar el fenómeno de la guerra en Centroamérica con una aproximación totalizante en cuanto al conflicto en sí y a las esferas que abarca.

B) LAS RETAGUARDIAS: CAUSA Y EFECTO DE LAS FUERZAS POPULARES

En las guerras convencionales, el enemigo a combatir son las fuerzas militares propiamente tales y sus sistemas de apoyo logístico, los que en general son conocidos como retaguardia. Por su carácter eminentemente material, los contornos de su alcance son relativamente precisos y como tales, susceptibles de ser objeto de operaciones militares ofensivas.

En las guerras irregulares, las fuerzas insurgentes se convierten en fuerza militar contestataria al poder vigente, en la medida que son

28) *Ibid. idem*, subrayado nuestro.

29) Cable ACAN-EFE, *La Prensa*, Managua, 16 de junio de 1986.

30) Jorge Vargas, "La militarización y la reestructuración nacional de Costa Rica", en "Centroamérica: la guerra de baja intensidad", *Cuaderno de Pensamiento Proppia*, CRIES, Managua, enero de 1986), págs. 102 y siguientes.

capaces de generar una determinada (mayor o menor) capacidad de convocatoria o reconocimiento. Su existencia, como alternativa legítima, depende del reconocimiento que genere y, por lo tanto, de su éxito en la "disputa de las bases" de la sociedad, cuya conducción (y destino) se contesta. En otras palabras, de la vigencia de su proyecto político.

La relación de la fuerza beligerante con sus bases de apoyo es en sí un objetivo político, pero además es una relación en que ambas partes inciden o determinan a la otra. La fuerza militar material y humana procede de este apoyo y es función de él; y los avances y desarrollo de la fuerza militar generan a su vez la consolidación política de esta fuerza en sus bases de apoyo.

En las luchas revolucionarias, las bases de apoyo no son sólo fuentes de aprovisionamiento y recambio, sino fundamentalmente sujetos activos y en última instancia, destinatarios del triunfo popular. La continuidad fuerza-retaguardia diluye el límite entre una y otra categoría, a no ser por la distancia física que medie entre los frentes de combate y las bases de apoyo o retaguardias.

El propio concepto de retaguardia se hace difuso. Es una "masa" que no está necesariamente concentrada y cuyos contornos son cambiantes. Puede ser el simpatizante que labora en organismos estatales, el militante urbano, el correo campesino, el "delegado de la palabra", el activista de los derechos humanos, la madre de un combatiente o de un "desaparecido", un comerciante, un burócrata, un profesional, funcionario o independiente, etc.

Estas precisiones son fundamentales para la caracterización que hace la CBI del "enemigo", particularmente desde el punto de vista de la operatividad.

En la guerra de baja intensidad, por la particular vinculación existente entre retaguardia y fuerzas operativas, el grado de prioridad que la concepción contrainsurgente otorga a las retaguardias enemigas es altísimo, y contra ellas se dirigen todo tipo de tácticas, desde la "guerra psicológica", destinada a ganar "las seis pulgadas existentes entre las orejas del campesino",³¹ hasta el bombardeo masivo de saturación sobre áreas pobladas de zonas "liberadas", dirigido, tanto a reforzar la táctica anterior por el terror, como a sacarle "el agua al pez". El dilema es ganar la masa o destruirla. En el marco de la disputa, en ambos casos, subyace el objetivo final de desarticularlas como apoyo a las fuerzas revolucionarias y rearticularlas como retaguardia propia. Más adelante, cuando abordemos el punto de la militarización de la sociedad civil, aparecerán ejemplos concretos sobre estos procedimientos.

31) John Wachtelstein, "Conflictos de Baja Intensidad en el período post-Vietnam", Conferencia dictada ante el American Enterprise Institute (Washington, 16 de enero de 1985).

Conceptos

Desde el punto de vista de este análisis, nos parece importante distinguir dos grandes categorías de retaguardias: las que pertenecen al frente interno y las que corresponden al frente externo.

En el frente interno podemos diferenciar, para usar el léxico militar, la retaguardia próxima o cercana, constituida por las fuentes inmediatas y directas del apoyo material y político; y la retaguardia lejana, para identificar aquellas fuentes que constituyen el origen (inicio) del apoyo. Se ajustan a estas definiciones, según sea la fuerza beligerante a que nos referimos, la proximidad física y grado de afinidad político-ideológica del sector, las siguientes: las masas que viven en las zonas de control insurgente, las organizaciones políticas afines, las organizaciones sociales (humanitarias, sindicales) y religiosas, y el aparato del Estado. Como retaguardia potencial (y objetivo político) se encuentra toda la población con sus diferentes sectores.

En el frente externo es posible distinguir: los gobiernos e instituciones gubernamentales afines, organismos de solidaridad, organizaciones políticas y grupos privados. Todos ellos enmarcados en distintos grados de compromiso y solidaridad.

Para los ejércitos gubernamentales empeñados en una guerra contrainsurgente, su retaguardia próxima material y política está constituida por el propio aparato gubernamental. En los regímenes de la DSN en los que el gobierno está en manos de civiles, las relaciones gobierno-fuerzas armadas son indefectiblemente conflictivas, toda vez que el poder formal está en los gobiernos de democracias restringidas y el poder real en los propios ejércitos. Aunque están articulados por los mismos fines antisubversivos, sus procedimientos son diferentes y hasta contradictorios (ver estadísticas).

A lo anterior se suma el hecho que la legitimidad relativa de tales gobiernos cubre por extensión a sus fuerzas armadas. De allí que las crisis políticas, producto de los modelos sociales y económicos que deben impulsar, también son traspasadas al ejército, el que ve profundamente afectada su estructura, estabilidad y, por ende, su eficacia militar.

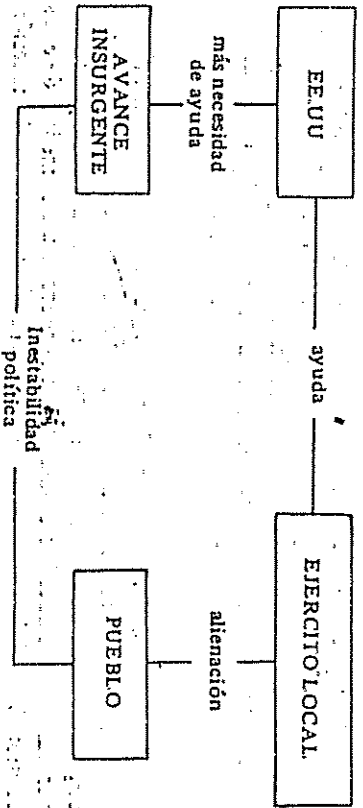
En forma aún más directa, la contradicción entre ambas instancias, gobierno civil-fuerzas armadas, se hace más abierta en la disputa por la asignación de recursos, para los cuales las fuerzas armadas tienen una permanente e insaciable avidez. Dada la precariedad de medios de estas economías subdesarrolladas y dependientes, asociadas por la reacción mundial y la capacidad nacional limitada para satisfacer las demandas de sus ejércitos, contrasta con las críticas necesidades de todos los otros sectores sociales.

La disputa se expresa entre el proyecto "civil" antisubversivo, basado fundamentalmente en reformas, y el proyecto militar, la guerra. Tal cual lo argumentamos en el número anterior (ver DSN), la crisis económica no permite recursos propios, ni a unos ni a otros, aunque por su rol dominante, la disputa normalmente se resuelve en favor de las Fuerzas Armadas.

De lo anterior se deriva la constatación de que la verdadera retaguardia, logística e ideológica, de estos ejércitos sea necesariamente el aparato militar norteamericano. De esta relación depende su existencia, su forma y operatividad. Esta realidad determina una relación de dependencia que, de por sí, tiende a reproducirse.

La injerencia externa (norteamericana) es un factor constante de alienación del ejército con su base nacional, lo que genera inestabilidad política al sistema en su conjunto, debido a la conversión de las Fuerzas Armadas en verdaderos enclaves de medios materiales y económicos, en medio de una crisis generalizada. (Con sus propios hospitales, tiendas, clubes, etc.)

Esta alienación e inestabilidad se agrava con "la corrupción y el papel que juega la ayuda en el mantenimiento y enriquecimiento de sectores sociales vinculados al gobierno: a la empresa privada y al ejército".³² Esta inestabilidad, por presentarse en una sociedad atravesada por un conflicto radical, de una manera u otra, se constituye en ventaja para la parte insurgente, ventaja que en una lucha revolucionaria se convierte en avance militar. Para enfrentarlo, el ejército gubernamental debe necesariamente recurrir a su fuente sostenedora, los Estados Unidos, cerrando el círculo vicioso de: ayuda, dependencia, alienación, inestabilidad política, avance insurgente, más ayuda...



32) Joaquín Villabos, "El estado actual de la guerra y sus perspectivas", *Revista Estudios Centroamericanos* ECA (San Salvador, Mayo de 1986), pág. 188.

En la medida en que la intervención foránea se hace parte cada vez más importante del conflicto, la esencia de la GBI se desvirtúa. Efectivamente, al buscar como fin estabilizar los sistemas políticos dentro de parámetros establecidos por sus intereses económicos y geopolíticos, la injerencia norteamericana, mediatizada por sus representantes locales, las fuerzas armadas y las democracias antisubversivas, provocan, como tendencia, el resultado opuesto: inestabilidad y fortalecimiento de las salidas nacionalistas de la insurgencia popular.

Todos los antecedentes precedentes nos permiten postular que, en las guerras revolucionarias, las retaguardias juegan un papel primordial, no sólo como instancias sostenedoras materiales y políticas, sino como fuentes de legitimidad, estabilidad y en última instancia, destinatarias y forjadoras del triunfo.

El concepto de retaguardia que hemos esbozado precedentemente, también es válido para situaciones en las que la lucha de liberación ha culminado con el acceso al poder de los movimientos populares. Tal es el caso de Nicaragua que, enfrentada a una guerra, constituye un ejemplo claro para la aplicación de las categorías analizadas.

En Nicaragua, el aparato gubernamental es la retaguardia próxima del ejército popular, pero la relación de continuidad ideológica gobierno-ejército-defensa popular transforma esta tríada en un único elemento.

A diferencia de El Salvador, donde una nación ha generado dos ejércitos antagonicos, en Nicaragua, la nación, como un todo único, enfrenta una fuerza que por su carácter asume la condición de extranjera. Ello, por la relación de dependencia absoluta y exclusiva de la contra-revolución con su retaguardia, los Estados Unidos.³³

Esto determina que para Nicaragua el frente externo asuma también una importancia relevante, no sólo como fuente de recursos económicos, sino principalmente como fuente de legitimidad frente a la agresión definida como externa.

La correlación de fuerzas en la guerra que libra Nicaragua debe medirse, no con la contrarrevolución, a pesar de su desproporcionado retaguardia, sino con los propios Estados Unidos. Ello hace del factor *apoyo externo* un elemento determinante en este cómputo de potencia y proyección futura.

33) "El juicio del gobierno (norteamericano) los 'contras' no pueden sobrevivir como fuerza de lucha sin una renovada ayuda militar, indicó un funcionario del cable de la UPI febrero 10 en Washington, publicado en *La Prensa*, Managua, 15-16 de febrero de 1986".

III. EFECTOS DE LA POLITICA CONTRA-INSURGENTE EN LA REGION

A) READECUACION DE LOS EJERCITOS DE LA REGION A LAS NECESIDADES DE LA DSN

Además de ser el puente ideológico entre las fuerzas armadas norteamericanas y los ejércitos de la región, la DSN, en su versión de la GBI, exige de una readecuación estructural y funcional de los viejos ejércitos oligárquicos o pro-oligárquicos de la región, formados en la visión clásica de guerra convencional, para ponerlos a tono con la aplicación de tácticas de guerra irregular.

Aun cuando *históricamente* los mecanismos militares de estos países nacen y se desarrollan en correspondencia a los intereses de las oligarquías, formalmente fueron erigidos en garantes de la soberanía nacional. La naturaleza oligárquica de estos ejércitos sufrió *modificaciones en su forma*, aunque su *contenido* de clase se ha mantenido inalterado, durante los últimos cincuenta años, hasta la escalada militar norteamericana del último lustro.

Estas modificaciones en los ejércitos procedieron, en no pocas ocasiones, de fuerzas internas a los institutos armados que buscaban su modernización y su profesionalización, para cumplir realmente con el rol institucional. Sin embargo, su dependencia económica de la oligarquía ha constituido una atadura tan fuerte, que aún los sectores "constitucionalistas" o "institucionalistas" internos a la fuerza armada no lograron romper este ligamen.

La coexistencia de sectores fuertemente conservadores y pro-oligárquicos y sectores "institucionalistas" y hasta progresistas en el seno de las fuerzas armadas, es lo que posibilitó la permanencia de los ideales nacionalistas en el seno del ejército, hasta la llegada de la militarización pro-norteamericana, influida por su DSN en la variante de "guerra de baja intensidad".

En este sentido, postulamos que la conversión de estos ejércitos en fuerzas contrainsurgentes, que libran una lucha anti-subversiva inspirada en la DSN, tiende a romper en forma paulatina, pero muy contradictoria, no solamente su tradicional dependencia de las oligarquías criollas, sino también tiende a romper con la permanencia en su seno de sectores "institucionalistas" y nacionalistas.

La conversión gradual de los ejércitos en eficientes fuerzas contrainsurgentes y la creación de ejércitos contrarrevolucionarios en la región, los cuales dependen no sólo económicamente, sino que también son dirigidos por militares norteamericanos, plantea un cambio drástico en la naturaleza de estos mecanismos militares: su conexión en apéndice

ces militares de las fuerzas armadas norteamericanas, o en aparatos extensivos de ellas, demostrando así la profundidad y extensión de la intervención norteamericana y sus tendencias desnacionalizantes y antipopulares.

Por otra parte, en el marco de la "seguridad nacional", las fuerzas armadas se vuelven "ejércitos subsidiados" por los Estados Unidos, lo que impone a ellos un ritmo de crecimiento que es imposible de sostener con el "presupuesto nacional".

Cuadro No. 1

Aumento efectivos militares ejércitos centroamericanos (1980-1985)

	Guatemala	El Salvador	Nicaragua	Honduras	Costa Rica
1980	14,900	13,250	25,000/8,300*	11,300	5,000
1985	51,600	56,400	61,800	25,500	15,498

Nota*: De acuerdo a datos oficiales de junio de 1979, citados en las fuentes siguientes, la Guardia Nacional contaba con 25,000 efectivos. A comienzos de 1980, el naciente Ejército Popular Sandinista contaba aproximadamente con 8,300 efectivos.

1. Córdova M., Ricardo. *La Militarización de América Central (1981-1985)*. Mimeo. México, diciembre de 1985, pág. 7, cuadro 1.
2. *INFOPRESS CENTROAMERICANA*, núm. 345, 7 de junio de 1979, pág. IV.
3. *ABUJAMA*, vol. 1, núm. 1, pág. 1. "La dimensión militar en la crisis de Centroamérica". Ponencia a la Conferencia *La Crisis Centroamericana y sus Implicaciones*. El Colegio de México-IISS, México, mayo de 1985.

La hipertrofia de los aparatos militares exige cada vez mayor presupuesto y del incremento acelerado del apoyo económico para la "seguridad" estadounidense; en la medida en que el conflicto regional se prolonga, lo cual conspira contra todos los esfuerzos que se hacen en el campo de la reactivación económica y de los programas de desarrollo social.³⁴ Esto último es válido para el caso de Nicaragua, quien

34) A este respecto dice el "Informe al Comité de Control de Armas y Política Exterior sobre la ayuda norteamericana a El Salvador" (en adelante se citará como el "Informe Müller") de los congresistas Müller, Leach y Hatfield: "Mientras nuestra ayuda directamente relacionada a la guerra llega a la cantidad de más de US\$50.000 dólares por cada rebelde salvadoreño, nuestra ayuda para la Reforma y el Desarrollo sólo llega a US\$300 dólares por cada salvadoreño que vive en la pobreza" (Washington D.C., Febrero de 1985), pág. 28.

ve postergados los beneficios sociales del proyecto popular sandinista al dedicar prioritariamente sus recursos a la "movilización militar" de su población, para librar una guerra de defensa de la revolución (destinando cerca del 50% del presupuesto a la defensa).

Además, por el hecho de ser "ejércitos subsidiados", ello les permite a los norteamericanos acceder a su conducción directa, ya sea mediante maniobras militares, como en Honduras, o directamente en la guerra, como en El Salvador. Esto tiene implicaciones claras en el manejo de la política interna; es decir, que como ya apuntamos, la dirección de los aparatos militares introduce a los norteamericanos en forma directa a participar e influir en la política nacional, distorsionando de esa manera, aún más, el sistema político, que tiende a militarizarse y a desrationalizarse más rápidamente.

La intencionalidad norteamericana de fortalecer las relaciones directas de dependencia entre las instituciones armadas de los Estados Unidos y sus homólogos centroamericanos, constituye, en el fondo, una nueva modalidad de intervención político-militar en Centroamérica, al acceder a las máximas decisiones en lo que respecta a la actividad de fuerzas especiales, del perfeccionamiento de fuerzas policiales en contrainsurgencia urbana y, especialmente, en la coordinación de los aparatos de inteligencia político-militar a nivel regional.³⁵

Pero, a la vez se da una dimensión nueva en esta intervención directa, la cual se expresa en la tendencia a abrir "teatros de guerra" novísimos, en donde los "soldados" son civiles, algunos altamente capacitados en el manejo de las técnicas de computarización (recolección de información preparando bases de datos relacionales, que son archivos de computador que sirven para vincular organizaciones sociales, sindicales, etc., con personas o líderes populares, con fines contrainsurgentes, es decir para "neutralizarlos"). Otros sectores especializados en técnicas de "guerra psicológica" también se ubicarían aquí: todo el personal capacitado para dirigir "aldeas modelos" o programas de contrainsurgencia, enmascarados como "ayuda humanitaria". Esta nueva dimensión de la guerra tiende a opacar la división entre lo militar y lo civil, por lo cual se entraría a una concepción de "guerra total", en donde se tiende, como en la visión orwelliana, a la militarización de toda la vida civil, con consecuencias impredecibles en una guerra prolongada.

35) Numerosos viajeros que entran por ejemplo a Costa Rica, vía aérea, no sólo con procedencia de Nicaragua, son objeto de interrogatorios, por agentes de la "Seguridad Nacional", siendo de tal naturaleza la información manejada para tales interrogatorios que es fácil colegir que existe una coordinación entre las policías políticas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, y que por sí solos no podrían manejar sin el concurso y apoyo de la CIA. Esto se confirma con la aparición del "Programa anti-terrorista regional"; ver detalles del programa en "Memorandum del Dept. de Estado al asesor de Seguridad Nacional, Robert MacFarlane sobre Financiamiento del Entrenamiento Policial en Centroamérica" (Washington D.C., junio de 1985), pág. 4-8.

Vemos un poco detenidamente los cambios que se suceden en los casos de El Salvador y Nicaragua, tratando de establecer elementos de comparación en dos procesos que, por esencia, son diferentes, pero que tratan de homogeneizarse por la perspectiva norteamericana.

⁴ a. El Salvador

El caso de El Salvador es particularmente ilustrativo, en la forma y efecto de los cambios de las respectivas fuerzas, con relación al desarrollo de la guerra.

Después de la primera demostración efectiva de fuerza del FMLN, la ofensiva general de enero de 1981, el ejército salvadoreño, empleando sus grandes unidades regulares, emprende una campaña tendiente a la aniquilación masiva de su adversario. Para ello, moviliza todas sus fuerzas y medios. Confía en que el esfuerzo inicial ha debilitado profundamente a la guerrilla.

La falta de dinamismo del ejército gubernamental para enfrentar situaciones tácticas cambiantes y la ineficacia para mantenerse ocupando territorios fuera de sus bases, determina que su campaña, además de causarles un gran desgaste material y humano, constituya un serio revés para los planificadores y conductores.

Ello permitió que en corto plazo, julio y agosto de 1981, el FMLN estuviera en condiciones de tomar la iniciativa y comenzar una nueva ofensiva que logró fijar a las unidades del ejército en sus guarniciones principales.³⁶

Esta inesperada campaña del FMLN y sus exitosos resultados dio origen a un serio debate entre el mando del ejército, y entre éste y sus asesores norteamericanos.

Queda en evidencia la insuficiencia, tanto de la ayuda militar, como de la presencia norteamericana, pero sobre todo, se manifiesta la inadecuación del ejército para enfrentar una guerra irregular.

Simultáneamente con la implementación de "formas democráticas" tendientes a, entre otros objetivos, aislar políticamente a la guerrilla, se da comienzo a las primeras reformas militares. Es en este período, en que se crean los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata, y se aumenta el adiestramiento en las tácticas de contrainsurgencia, adquiriéndose el correspondiente equipamiento técnico. La fuerza aérea aumenta su dotación de helicópteros, aptos para el transporte de tropas y la de aviones apropiados para la lucha contrainsurgente (UH-1, A-37, AC-47).

36) De esta época data el reconocimiento franco-mexicano del FMLN-FDR como "fuerza representativa", para ser considerada en negociaciones sobre el conflicto.

Desde mediados de 1982 hasta finales de 1983, la seguridad que gana la guerrilla para sus desplazamientos por gran parte del territorio, le permite implementar la táctica de la concentración de sus fuerzas. Orgánicamente, el FMLN constituye brigadas y batallones, lo que le permite efectuar acciones de envergadura, como la toma del Cuartel de la IV Brigada de Infantería en El Paraíso, Chalatnango, en diciembre de 1983.

Frente a este avance, fundamentalmente cualitativo, el alto mando militar del gobierno debe tomar la decisión de efectuar una suerte de repliegue que le permita tomar tiempo para reestructurar profundamente su esquema orgánico y operativo, evitando así el desmoronamiento de todo el aparato.³⁷

Basándose fundamentalmente en los resultados adversos de la guerra y en el gran número de bajas que soporta el ejército, la asesoría norteamericana impone finalmente su concepto de "tropas sin cuartel". Se crean y transforman unidades destinadas al despliegue permanente en el terreno, con alto grado de movilidad y con un diseño netamente ofensivo. Estas tropas, eminentemente irregulares, carecen sin embargo de condiciones esenciales para el tipo de guerra que deben enfrentar. En primer lugar, no tienen arraigo en las masas de las zonas donde operan, lo que les hace dependientes de las estructuras logísticas regulares, limitando su movilidad y autonomía. Desconocen el terreno y simplemente la oficialidad no puede adaptarse a una forma operativa desconocida, en la que el enemigo les lleva una gran ventaja.

Con persistencia, la presión norteamericana va vertiendo la resistencia de los oficiales salvadoreños a renunciar a las tácticas convencionales de la guerra regular. Coincidentes en el pensamiento estratégico con la visión norteamericana de seguridad, la correspondencia técnica de contrainsurgencia va imponiéndose a la jefatura salvadoreña, lo que permite profundizar la "desregularización" de las fuerzas armadas.³⁸

Aumentan al doble las brigadas de infantería, y se crean tropas cazadoras que se distribuyen territorialmente en un despliegue ofensivo. Junto con ello, se refuerzan las unidades helitransportadas, se crean las Patrullas de Reconocimiento de Largo Alcance, los Batallones antiterroristas, los Batallones Pirañas de la Marina, los Batallones de Reacción Inmediata, etc.

Los esfuerzos del ejército, sin embargo, no muestran progresos significativos en el terreno. El FMLN continúa sus acciones, ajustando

37) Ver nuestro trabajo: "El Plan de contrainsurgencia norteamericano para El Salvador y los cambios en las fuerzas armadas", "Centroamérica: la Guerra de Baja Intensidad", Cuadernos de Pensamiento Propio, CRIES, (Mangua, febrero de 1986).

38) Ver lo confirmado por el Coronel J. Waghelstein en su conferencia, "Conflictos de Baja Intensidad en el período post-Vietnam", en el African Enterprise Institute, (Washington D.C., 16 de enero de 1985).

sus campañas, tanto a las ofensivas gubernamentales, como a las coyunturas político-económicas.

Consecuente con esta forma de guerra y sus resultados, el ejército debe incorporar un elemento extraño a su idiosincracia: esta lucha le obliga a disputar la adhesión política de las masas a su accionar.

La incorporación del trabajo político al esquema militar (guerra sociológica) determina, en los aparatos militares, una hibridación anti-funcional, que en última instancia se convierte en guerra contra la población. El nivel de la guerra (masividad e intensidad) se eleva, incorporando, por parte del ejército, "operativos de limpieza" con la aviación y artillería en vastas zonas pobladas.

Es la lógica militar, enfrentada al fenómeno del apoyo de las masas a las fuerzas insurgentes.

Frente a este escalamiento, el FMLN debe reajustar su accionar y estructura orgánica, esta vez partiendo de la existencia de unidades mayores. Se procede a la desconcentración de las fuerzas para, en una táctica altamente dinámica, recurrir a la concentración sólo en función de operaciones específicas. El esfuerzo del ejército por probar la eficacia de su nueva configuración se ve frustrada, ya que, a pesar de la mayor capacidad de respuesta que ha desarrollado, no logra trabar combates con unidades concentradas de la guerrilla. La sofisticación de su aparato de información y análisis, por su estructura y función, no logra romper el ritmo "regular".

Eufemísticamente, los especialistas del Pentágono describen la situación como "empate". Este solo hecho, si así fuera, demuestra la dificultad de competir en un terreno tan complejo, como es la lucha irregular, con adaptaciones de un ejército regular. La falla es de fondo, se requiere mucho más que aviones, armas e información para enfrentar a un movimiento ~~insurgente~~ fuertemente enraizado en su medio social.³⁹

La modalidad de la guerra, en última instancia, es impuesta por las fuerzas insurgentes. Es un enfrentamiento político que ha alcanzado el nivel del enfrentamiento militar. Sus conductores son políticos, que se han visto obligados a hacer la guerra, sin descuidar su esencia.

Por ello, la insurgencia articula constantemente el objetivo político con el objetivo militar, resultando en una campaña militar coherente. Esta articulación le da una base moral, que imprime un valor definitivo en la mediación de las correlaciones de fuerzas respectivas, tal y como se abordó en el análisis de las retaguardias.

39) A este respecto ver el revelador artículo del dirigente guerrillero Cmdte. Joaquín Villalobos del FMLN, "El Estado actual de la guerra y sus perspectivas", *Revista Estudios Centroamericanos* (El Salvador, mayo de 1986), pág. 183.

Al contraste evidente que presenta el ejército gubernamental con la situación descrita, se suma que también su capacidad de crecimiento cuantitativo y su capacidad de asimilación de tecnología más avanzada (crecimiento cualitativo) tiene un techo, ⁴⁰ cuya tolerancia mínima está dada por la saturación. Ello implica que el espacio de maniobras norteamericanas con el ejército salvadoreño se reduce sensible-mente. He aquí una regla esencial a la GBI, no escalar la guerra ni de-masado rápidamente ni en forma desproporcionada, de lo contrario la estrategia tiende a desnaturalizarse.

b. Nicaragua

El ejército de Nicaragua, el más joven de la región, ha tenido, a partir del triunfo de la revolución, dos cambios fundamentales. Su creación, que implicó la transformación de fuerzas y columnas guerrilleras en un ejército regular; y posteriormente, con el transcurso de la guerra de agresión, la readecuación de su organización y doctrina para enfrentar la guerra irregular con la contrarrevolución.

El criterio para la regularización de sus fuerzas obedeció, tanto al afán reordenador de las nuevas autoridades, como a la proyección que éstas hacían de la situación internacional. Efectivamente, el esfuerzo por recomponer el aparato estatal implica la creación de las fuerzas armadas regulares. Influyó también la percepción que se tuvo desde los inicios sobre lo que sería el peligro principal: una invasión externa encabezada por los Estados Unidos.

Se abordan en consecuencia dos tareas principales: la incorporación de las masas a la defensa y la estructuración de los órganos perma-nentes de la defensa, el Ejército Popular Sandinista y el Ministerio del Interior. El cumplimiento de estos objetivos se da en una marco econó-mico muy restrictivo, lo que consolida la concepción de desarrollar fuerzas armadas profesionales pequeñas y eficientes, en torno a las que se articularían las distintas formas de participación popular para la defensa.

Consolidado el triunfo militar revolucionario, se conciben como enemigos potenciales al imperialismo norteamericano y a las fuerzas reaccionarias de los países fronterizos; como asimismo, a la incipiente contrarrevolución que comienza a manifestarse en las bandas de ex-guardias somocistas que operan desde sus refugios en Honduras.

La guerra es entonces concebida como defensiva y popular, y en sus formas, como guerra regular en las direcciones principales, con

40) Por ejemplo la extensión del territorio y el carácter de la guerra son un límite al empleo de técnica aérea sofisticada, de armas de artillería pesada e incluso de técnicas de detección electrónica aérea demasado sofisticadas, cuya aplicación se complica por el grado de aproximación de las fuer
en conflicto.

pequeñas manifestaciones de formas irregulares de carácter marginal-complementarias, representadas en la persecución de las bandas contra-revolucionarias.

El problema principal consiste en transformar una fuerza guerrillera y rutiliana en un ejército nacional regular, lo que implica aglutinar bajo un solo mando las fuerzas existentes, que tendían a la dispersión y al caudillismo. El proceso no está exento de dificultades. ⁴¹ Por una parte, la mentalidad y estructura guerrillera se resiste tenazmente a la transformación que implica exigencias completamente nuevas a jefes y soldados en el terreno de la disciplina, formas y normas de vida, etc.; y por otra parte, la falta de recursos materiales necesarios para el mon-taje de un ejército regular.

A partir de las premisas básicas enunciadas y de una apreciación estratégica más completa, se inicia el desarrollo sostenido del Ejército Popular Sandinista, que comprende la organización de las armas funda-mentales: infantería, artillería, blindados, ingenieros, fuerza aérea, marina, etc.

Elemento importante a destacar, como característica particular de este proceso que no se repite en ningún otro ejército centroamericano, es la incorporación masiva y voluntaria de la población a las tareas de la defensa, a través de las milicias populares. La concepción de guerra regular que subyace en el proceso, hace necesaria una estrecha articula-ción orgánica entre las fuerzas populares y las regulares.

El esquema levantado sobre las hipótesis iniciales comienza a sufrir variaciones en 1982, año en que el país comienza a enfrentar una dife-rente clase de invasión. El asedio que hacían, desde el mismo triunfo, pequeñas bandas de ex-guardias cambia cualitativa y cuantitativamente, con el inicio de mayores y más sistemáticas operaciones contra-revolu-cionarias. ⁴²

En 1982 y hasta 1983, la defensa militar, en cuanto a fuerzas vivas, se articula en torno a los Batallones de Infantería de Reserva (BIR), unidad básica militar, compuesta por civiles con entrenamiento que prestan servicio por seis meses.

La composición heterogénea de estas unidades de milicianos, su insuficiente experiencia y limitada preparación combativa determinan que se evidencie una desventaja operativa en relación a las fuerzas de tareas somocistas, que se presentan al teatro mejor preparadas y equipa-das. Esta situación permite que la iniciativa pase a las fuerzas contrarre-

41) Comandante de la Revolución, Humberto Ortega, "El pueblo en armas garantiza la victoria". Conferencia del 7 de febrero de 1985, publicación Direc-ción Política EPS.

42) Philip Brenner y William LeoGrande, "Congress and the Nor-so-Secret War Against Nicaragua: preliminary analysis" (Washington D.C., 1982), pág. 4.

volucionarias infiltradas, que despliegan una acabada táctica de lucha irregular.

En 1983, las operaciones contrarrevolucionarias habían adquirido el carácter de una guerra irregular en gran escala, con un extenso teatro de operaciones. Este escalamiento sobrepasa las capacidades del pequeño ejército regular y de sus milicias no profesionales. La hipótesis de que las pequeñas bandas contrarrevolucionarias sólo jugaban un papel complementario-marginal, en preparación de la estrategia norteamericana de invasión, resulta superada por los acontecimientos.

Esta situación abre paso al segundo gran cambio del ejército nicaraguense, la creación de una gran capacidad ofensiva irregular. Para ello, a mediados de 1983 se crea el Servicio Militar Patriótico, servicio de reclutamiento obligatorio por dos años. La medida constituye un salto cualitativo y un piso cuantitativo de carácter indudablemente estratégico, destinado a revertir definitivamente el curso de la guerra. Al primer llamado, efectuado a comienzos de 1984, se enlistan aproximadamente 10.000 jóvenes. Los reclutas son organizados en batallones de choque, irregulares, de alta movilidad y poder de fuego: los Batallones de Lucha Irregular (BLI).⁴³

La medida permite nutrir al ejército de una masa de combatientes seleccionados, aptos para recibir un completo entrenamiento, y capaces de acumular una rica y útil experiencia combativa. Aunque la medida no está exenta de dificultades, ni de costos políticos y económicos, su impacto es menor que el causado por la movilización de milicianos, ya que la mayor parte proviene del sector productivo.

La permanente amenaza de invasión, expresada en las maniobras continuas y masivas en Honduras y el litoral, y en la creciente hostilidad de la administración norteamericana contra el gobierno sandinista, determina que la conducción superior no descuide la preparación y equipamiento de las unidades regulares del ejército. Sin perjuicio de lo anterior, las unidades convencionales desarrollan capacidades y se tecnifican para sostener la guerra irregular de la contra. Muestra importante de ello es el equipamiento, a fines de 1984, de técnica aérea de transporte táctico y apoyo de fuego para la lucha irregular, como los helicópteros MI 17 y MI 25.

La concepción de guerra popular, en esta etapa, es reforzada con la creación de Milicias Territoriales, Comunidades de Auto-defensa, Defensa Civil, etc., cumpliendo diversas tareas, tanto defensivas, como ofensivas, a lo largo de todo el territorio.⁴⁴

43) Comandante Joaquín Cuadra, Vice-Ministro de Defensa, EPS, Conferencia de prensa, 14 de octubre de 1985.

44) Comandante Roberto Calderón, EPS, Entrevista con *Agencia Nueva Nicaragua*, septiembre de 1985.

Los resultados pronto se dejan ver. Poco a poco se van desarticulando las Fuerzas de Tarea y Comandos Operativos de la contra, perdiendo ya a fines de 1984 la iniciativa y entrando en el año siguiente, en lo que se ha definido como su derrota estratégica. Los esfuerzos para levantar su capacidad, a través del equipamiento técnico, han resultado infructuosos (a pesar de su espectacularidad, como en el caso de los misiles tierra-aire), pues nunca lograron alcanzar objetivos militares de importancia.

Comparando los esfuerzos de transformaciones efectuadas en los ejércitos de El Salvador y Nicaragua, tema que en sí constituye una materia de análisis especial, llama la atención que esfuerzos aparentemente similares, "irregularizar" fuerzas convencionales, hayan arrojado resultados tan disímiles, y precisamente en contra de las fuerzas que reciben ayuda prácticamente ilimitada de Estados Unidos.

Las ventajas que juegan en favor del Ejército Popular Sandinista parecieran ser la mayor flexibilidad al cambio, por su juventud (personal e institucional) y por tener en su origen cercano raíces irregulares. También pareciera ser ventajosa la posibilidad de contar con el concurso entusiasta de la población para asumir tareas de defensa en los distintos escalones, y finalmente por la naturaleza del enemigo.

La contra, comprometida en una lucha irregular, no ha logrado articular una retaguardia local de significación en las zonas de guerra, ni mucho menos cuenta con formas de referencia política en las ciudades. Ello origina limitaciones de toda índole, entre otras, la de depender enteramente de la ayuda norteamericana. Asume más la forma de fuerza expedicionaria que emplea métodos de lucha irregular, antes que una fuerza guerrillera insurgente.

La política exterior norteamericana, dentro del marco de la GBI, intenta por todos los medios a su alcance dotar a la "contra" de una retaguardia externa, similar a la que goza su enemigo. La legitimación internacional de las fuerzas del FDN y la presión para generar un frente político se han convertido en la obsesión de la Administración Reagan.

B. MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA POLÍTICA

a. *Contra-insurgencia y autoritarismo en políticas económicas*

Las políticas económicas de los gobiernos de la región estarían enfiladas a la "estabilización y reactivación económica" del aparato productivo de estos países, como un esfuerzo paralelo, pero integral, a la estrategia militar que pretende la derrota de los movimientos de liberación nacional y el derrocamiento de la Nicaragua Sandinista, mediante los planes de "pacificación".

Aún cuando los periodos, ritmos de aplicación y características del plan son diferentes para cada país, en general se pretende el "renovamiento" del modelo de capitalismo dependiente y periférico que históricamente ha ratado las economías y los sistemas políticos a la hegemonía regional de los Estados Unidos. Sin embargo, dada la crisis que atraviesa el capitalismo periférico en la región, éste no puede ser postergado sin hacerle reajustes en algunos componentes estructurales.

Esta problemática puede ser abordada en dos niveles que son distintos, pero orientados por un mismo objetivo: contrainsurgente. A nivel macro, estarían los "paquetes económicos" para tratar de estabilizar la lógica de funcionamiento del capitalismo dependiente. A nivel de micro-programa, se aplica todo el paquete de "ayuda económica" que tiene fines *contrainsurgentes* o que está destinado a construir infraestructura con fines político-militares, con el objeto de preparar condiciones para una prolongada presencia norteamericana en la región.

Por una parte, está la "ayuda" aplicada a "planes de desarrollo comunal" o de acción cívica, sean estos dirigidos por militares, civiles o instituciones privadas humanitarias (de la nueva derecha estadounidense); dichos planes tienen como objetivo la contra-insurgencia activa (El Salvador y Guatemala) o preventiva (Honduras, Costa Rica), para quitar apoyo social a los movimientos populares entre la población rural, tales como los planes CONARA, el Plan Mill y el U.P.R. (El Salvador), de "Aldeas estratégicas" (Guatemala), o la acción cívica en manobras militares (Honduras, Costa Rica y Panamá) por el ejército norteamericano.⁴⁵

Los planes de desarrollo y de acción cívica dirigidos por los militares, tienen un triple propósito:

- 1) Reparar castrensemente los daños causados a la infraestructura socio-económica por la guerrilla, frenando el ritmo de desgaste.
- 2) Promover la participación directa de la población civil en estas actividades, fomentando una dependencia logística que permita controlarla y, a más largo plazo, ir creando una identificación de la población con el gobierno y el ejército.
- 3) Aclimatar tropas norteamericanas en terreno centroamericano.

También se ubica en este rubro la "ayuda" dedicada a la formación de los cuerpos paramilitares, denominados en la jerga contra-insurgente "patrullas de auto-defensa civil", que representan un mayor grado de militarización de la población civil. De acuerdo al Informe Miller "el ejército salvadoreño usa la ayuda humanitaria para fines militares. Por ejemplo: para inducir a los aldeanos a formar patrullas de

45) Ver nuestros trabajos en: *Centroamérica: la Guerra de Baja Intensidad*, Nicaragua, *Cuadernos del Pensamiento Proplea*, febrero de 1986.

defensa civil".⁴⁶ En Guatemala, la AID, desde 1984, provee ayuda principalmente para la contra-insurgencia en el altiplano, por lo cual, no es difícil deducir que gran parte se aplica al crecimiento de estos cuerpos paramilitares.⁴⁷

En la actualidad, estos cuerpos irregulares forman verdaderos ejércitos paramilitares en Guatemala y El Salvador, tendencia que se irá imponiendo en Honduras y Costa Rica, a medida que se profundice la intervención norteamericana por la presencia de los irregulares de la "contra" y la persistencia estadounidense por imponer los intereses de su "seguridad nacional".

Cuadro No. 2

Fuerza Paramilitares por País (1985)

	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Costa Rica
	88.500	911.000	4.500	70.000	19.500 (3)
			15.500 (+)		3.000 (+)
Total	88.500 (1)	911.000 (1)	20.000	70.000 (2)	22.500

Fuentes: Departamento de Estado de los EE.UU., citado en *The New York Times*, marzo 30 de 1985.

- 1) Son las denominadas "patrullas de auto-defensa civil".
- 2) Se refiere a las milicias que tienen un carácter diferente a los paramilitares de los otros países.
- 3) Fuentes en Costa Rica insisten en la existencia de entre 12 a 15 organizaciones paramilitares, en cantidad de 27.500 efectivos. El Armamentismo en Centroamérica, número inédito, pág. 2, S.A., S.L. noviembre de 1984.
- 4) Es cantidad de fuerzas "contras" asentadas en territorios "ajenos"; sin embargo, según fuentes diversas la cantidad de contras habría bajado sensiblemente en el último año, posiblemente hasta la mitad del número citado. Las calificaciones de paramilitares en cuanto no forman parte de un ejército regular interno.

Por otra parte, se destina ingente cantidad de recursos a la construcción o reconstrucción de infraestructura para usos militares. En Honduras, a partir de las interrupciones manobras militares, se har

46) *Informe Miller*, citado, pág. 28.

47) Ver trabajo de Deb Preusch y otros, "Ayuda externa de EE.UU. hacia Centroamérica", Albuquerque Resource Center (New Mexico, 16 de mayo de 1985), pág. 14-15.

dio general las "reformas económicas" orientadas por el FMI; todo lo cual indica que hay una creciente conciencia en Centroamérica sobre el papel de la naturaleza anti-popular imperialista de estos organismos, y que un modelo económico basado en la "seguridad" norteamericana puede provocar, en el futuro inmediato, un estallido social de consecuencias incalculables.

Este proceso de "desnacionalización" del Estado y la economía en Centroamérica, es una tendencia inherente al "modelo de seguridad económica" de los Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales controlados por este país, por lo que, en su esencia, no corresponde a las necesidades de los países de la región, sino a las exigencias de la D.S.N. norteamericana. Ello nos lleva a postular el modelo como profundamente anti-nacional y anti-popular, y es de prever que su implementación traerá mayor exacerbación de las ya graves desigualdades que persisten en la región.

b. Militarización de la política: las "democracias restringidas"

Como antes lo hemos mencionado uno de los aspectos claves de la política de seguridad norteamericana es el pretendido "reforzamiento del centro democrático" en la región; lo cual no supone terminar con el *poder real* de los militares, sino hacer un juego de apariencia con la instauración del "poder formal" de los civiles, a través de procesos electorales restringidos y fuertemente controlados, erradicando el fraude electoral tradicional y con el "alejamiento" de los militares a los cuarteles, o su concentración en la guerra, como en El Salvador y Guatemala.

Este esquema, no exento de contradicciones, es el que en general, aunque con variantes internas a cada país, se estaría impulsando en El Salvador, Honduras y últimamente en Guatemala. No es solamente por necesidad de "lavarle la cara" a las tradicionales dictaduras militares, incondicionales aliadas de los gobiernos norteamericanos, que se propician estas "democracias restringidas", sino particularmente por necesidades contra-insurgentes y/o de apoyo a la contra-revolución en Centroamérica.

Es decir, que al evaluar las posibilidades de estos gobiernos en la perspectiva de la "democratización", tal y como es concebida por la administración norteamericana, es ineludible plantearse su naturaleza: surgen de procesos electorales limitados y controlados y de pactos pragmáticos con las fuerzas armadas, que son las que realmente sostienen el poder; o enfrentan la oposición de las oligarquías, o de sectores

construido pistas aéreas, carreteras y puentes, bases militares, etc., combinados con acción icvica entre la población empobrecida. En Costa Rica, en la región fronteriza con Nicaragua, se ha impulsado la construcción de una serie de obras de infraestructura como: ampliación del aeropuerto de "Los Chiles" (capaz de recibir aviones DC-3), creación del Corando Atlántico de la guardia civil tica, construcción de la carretera San José-Guapiles-Siquirres-Limón, y mejoramiento y pavimentación de las carreteras a Upala, Los Chiles y Puerto Viejo, zona esta última de acantonamiento del "Comando del Atlántico".⁴⁸

A nivel macro económico se plantean los "programas de estabilización nacional del aparato productivo", diseñados e "impuestos" a los gobiernos por los organismos financieros internacionales, como el FMI, el Bancó Mundial y la AID norteamericana. La propuesta referente a la transformación y reproducción "estructural" que requieren las economías centroamericanas, se refiere a un modelo de *fomento de las exportaciones no tradicionales*, que apunta hacia la restauración de "las fuerzas del mercado competitivo", mediante la iniciativa privada, combinada con la visión de un Estado modernizado, en función de "la economía de la oferta" (*supply side economics*), en auge a nivel mundial; es decir, que el modelo apunta hacia el mercado externo, más que hacia la ampliación del mercado interno.

Por un lado, la tendencia que induce el proyecto es a la creación de un Estado cada vez más divorciado de las necesidades sociales, mediante la "reprivatización" del sector estatizado de la economía. Pero, además, con ello se provoca el acentuamiento de los rasgos autoritarios del Estado, mediante una mayor centralización de las decisiones estatales. Estas, a su vez se ven más influidas por las demandas de los organismos financieros internacionales, que utilizan la crisis de insolvencia crónica de los gobiernos centroamericanos, para presionarlos a que impongan "paquetes económicos" onerosos a los sectores populares.⁴⁹

A este respecto, es un fenómeno muy importante el de la oposición popular a los programas económicos impuestos por los organismos financieros internacionales, ya que en definitiva cargan los costos del déficit fiscal del Estado sobre las espaldas de la población trabajadora. Prácticamente en todo Centroamérica, el FMI es *sujeto del repudio popular* y de movilizaciones que no pocas veces terminan en el estallido de las masas como en Guatemala en agosto-septiembre de 1985; en Panamá, dio lugar a la remoción del presidente Barletta; en Costa Rica, en 1984, propició una movilización popular sin precedentes y en El Salvador, Honduras y Guatemala, actualmente, son objeto de repu-

48) Equipo Costa Rica del proyecto "Conflictos y alternativas de paz en la región centroamericana", "La Contrarrevolución en Costa Rica" (San José, noviembre de 1985), pág. 9-11, inédito.
49) Ver a este respecto *Envío*, No. 55-56. IHCA (Nicaragua) enero-febrero de 1986), pág. 47.

50) Estos pactos son bastante débiles porque se asientan sobre alianzas forzadas por los Estados Unidos. Por ejemplo: el pacto de Duarte con los militares

de ellas, por no ser participes de los pactos que llevan al "poder formal" a estos gobiernos; y lo que es fundamental, nacen por consentimiento (activo o pasivo) de una decisión estadounidense, todo lo cual en conjunto los hace muy débiles políticamente y fuertemente dependientes de la política norteamericana hacia la región.

Este hecho del poder real de los militares es reconocido por el actual presidente guatemalteco, Vinicio Cerezo, quien en una entrevista previa a las elecciones, con Piero Gleijeses, de *The New Republic*, afirma que:

... aunque fuera elegido, la puerta de la democracia apenas se abrió en Guatemala. Mi gobierno no plantearía reformas sociales, porque el ejército se opondría. Sería un gobierno de transición hacia la verdadera democracia. Si yo ganara el voto popular, los militares podrían negarse a reconocer mi triunfo; y si me dejaran tomar el poder, podrían impedirme gobernar. 51

Recientemente, Cerezo ha reconocido que "el ejército posee actualmente una alta cuota de poder", a raíz de un artículo publicado también en *The New Republic*, que contiene un análisis demostrando el poder real de los militares. 52

Por otra parte, pero congruente con lo anterior, en el planteamiento norteamericano se trata de oponer estos "procesos de democratización" a un pretendido "totalitarismo sandinista" en Nicaragua, para descalificar esta experiencia de autodeterminación y rescate de la soberanía nacional, y promover internacionalmente a sus "aliados en Centroamérica. En otras palabras, la administración norteamericana estaría tratando de vejar la contradicción histórica entre dependencia-autodeterminación en Centroamérica, presentándola como una lucha entre democracia versus totalitarismo en la región.

Simplificada mediante el esquema Democracia versus Totalitarismo las raíces históricas de la lucha de estos países, se recurre a intentos por construir artificialmente alianzas políticas (como la Comunidad Democrática Centroamericana, el Foro de San José y últimamente el "Grupo de Tegucigalpa), tratando de acercar a Costa Rica a los gobiernos en donde el poder real está en manos de los militares, para dar mayor credibilidad y legitimidad al proyecto contrainsurgente.

En El Salvador, se asienta sobre la base de que Duarte garantiza la entrada de "ayuda" norteamericana para ganar la guerra; a medida que el FMLN ha dado golpes político-militares que evidencian quién está ganando la guerra realmente, este pacto ha entrado en crisis, y sólo por la rápida intervención norteamericana, Duarte aún no ha sido desplazado por los militares de la presidencia. Ver en el *Miami Herald* del 23 de enero de 1986 el artículo de Tim Golden, "Pérdida de apoyo militar limita la autoridad de Duarte", que es muy revelador respecto a la función de estos gobiernos "democráticos", creaturas de la administración norteamericana.

51) Piero Gleijeses, "¿Los Militares cederán el poder?" reproducido en *Pensamiento Propio*, no 2; (Managua, agosto de 1985), pág. 45.

52) Ver el reporte "Necesario restar poder al ejército, declara V. Cerezo", *El Nuevo Diario*, 11 de julio de 1986.

La consecuencia para Costa Rica del esquema norteamericano de "construir o preservar la democracia" en Centroamérica, priorizando la seguridad de los Estados Unidos, es una creciente militarización de ese país, proceso que va socavando, cada vez más, las bases de su sistema político democrático-liberal.

Esto se expresa, en primer lugar, en las tendencias autoritarias que en los últimos años han aflorado en fuerzas políticas asociadas al Estado costarricense; 53 en segundo lugar, se manifiesta en la proliferación de los cuerpos paramilitares, tanto oficiales como privados (12 grupos paramilitares, de acuerdo con la Coordinadora por la Defensa de las Libertades Democráticas en Costa Rica); en tercer lugar, en la creación y entrenamiento por los Estados Unidos de batallones anti-subversivos y/o anti-terroristas; en cuarto lugar, fundamentalmente en la presencia de ejércitos contrarrevolucionarios de nicaraguenses y mercenarios, los cuales, además de quitar de hecho al Estado el monopolio de las armas y de la violencia, prácticamente se constituyen en un verdadero poder alternativo de facto en las regiones fronterizas con Nicaragua. Esto implica la enajenación de grandes porciones del territorio nacional al Estado costarricense. 54

Esta tendencia se acentuaría si se concretizan los planes asociados a los recién aprobados 110 millones de dólares que pretenden el fortalecimiento del "frente sur" de la contra.

Este ejército contrarrevolucionario constituido por nicaraguenses en su mayoría reclutados en los campos de refugiados y por mercenarios norteamericanos y europeos, es una fuerza que depende totalmente de la ayuda estadounidense y sus mandos también son dependientes de las directrices de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Es decir, que la presencia norteamericana en las actividades de la contrarrevolución armada es fundamental, tanto en Honduras como en Costa Rica. En este sentido, la responsabilidad por los efectos políticos y sociales más nocivos sobre los sistemas político-sociales de los países que sirven de retaguardia a estos grupos armados son consecuencia directa o indirecta del apoyo norteamericano, sin cuya protección y dirección no tendrían mayor incidencia en la región. 55

53) Sobre fuerzas políticas asociadas al proyecto norteamericano, ver el trabajo sobre Costa Rica próximo a publicarse en *Cuadernos de Pensamiento Propio* por Jorge Vargas y Miguel Gutiérrez, "Costa Rica, es el nombre del juego".

54) Ver el trabajo de Jorge Vargas, "La Militarización y la reestructuración nacional de Costa Rica", en *Centroamérica: La Guerra de Baja Intensidad*, págs. 117. En mayo de 1986, el Ministro de Seguridad Pública del gobierno del Presidente Arias Sánchez anunció la creación de un comando anti-terrorista, con el apoyo de cinco instructores norteamericanos que ya se encuentran en el país. *La Nación*, 14 de mayo de 1986, pág. 10A.

55) Uno de los ejemplos más ilustrativos del proceso desmilitarizador de estos países se ha presentado en el caso del "conflicto limítrofe" entre Honduras y El Salvador, el cual data del siglo pasado. Sin embargo, los Estados Unidos han intentado forzar arreglos adecuados a sus necesidades contra-insurgentes pasar.

Fuentes:

1. Ortega Daniel, "Daniel informa a la nación sobre gestión gubernamental". *Barricada*, 22 de febrero de 1986, pág. 3 (a) Datos 1980-1985.
2. Wheelock, Ricardo, "Socio rastreo de la CIA". *El Nuevo Diario*, 18 de julio de 1986, pág. 1-8 (a). Datos de enero a julio de 1986. "La derrota de la contrarrevolución. Datos Básicos, 1981-85", Mínx, Managua, pág. 6 (b). Datos de 1981-1985.
3. Wheelock, Ricardo, *Op. cit.*, (b). Datos de enero-julio de 1986.

Cuadro No. 6

Nicaragua: Víctimas de la guerra por sectores

1) Por edades (80-85) (a)	Cantidad
(a) Niños	912
(b) Jóvenes	2,193
(c) Adultos y ancianos	9,227
2) Cooperantes europeos	
(83-julio de 1986) (b)	8
(a) Muertos	22
(b) Secuestrados	
3) Otros	
(a) Huérfanos de guerra (80-86)	6,329
(b) Desplazados de guerra (80-86)	250,000/300,000 (c)

Fuentes:

- a) Incluye muertos, heridos y secuestrados. Ortega, Daniel: "Informe a la nación sobre gestión gubernamental". *Barricada*, 22 de febrero de 1986, pág. 3.
- b) Agencia Nueva Nicaragua, *Boletín Semanal* No. 9, febrero-marzo de 1986; NYT, 24 de agosto de 1986, pág. E-22.
- c) Los datos sobre desplazados provienen de dos fuentes: 250,000 de *INFOR-PRESS* Centroamericana y 300,000 del INSSBI (Instituto Nicaragüense de Seguridad y Bienestar Social).

El fenómeno de los desplazados de guerra es también de envergadura. En primer lugar, la emigración espontánea del campo a la ciudad ha provocado un catastrófico aumento poblacional en Managua (de 450 mil en 1979 a más de un millón de habitantes en la actualidad), creando una presión insostenible sobre los ya limitados sectores urbanos. Por

otra parte, las exigencias político-militares han impulsado al gobierno a desplazar cientos de familias campesinas e indígenas de sus lugares de origen, reubicándolas en mejores tierras, la mayoría de las veces, lo cual ha provocado dificultades socio-políticas y económicas al propio gobierno sandinista, quien hace esfuerzos por reasentar desde 1982 a 50 mil familias (300 mil personas), en una lógica que combina la defensa con la producción.⁶²

En definitiva, vemos que los efectos de la militarización se reflejan en un contraste dramático para los países de la región y de consecuencias impredecibles para el futuro: mientras el gobierno estadounidense suministra la tecnología, la logística y la dirección militar en la "guerra de baja intensidad", los pueblos centroamericanos son los que cargan con los costos sociales de la "lógica de la seguridad nacional norteamericana".

62) Información tomada de nuestro trabajo: "Nicaragua: país sitiado", *Cuadernos de Pensamiento Propio*, CRIES (Managua, julio de 1986), pág. 52-55.